TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO

SENTENCIA pronunciada en el juicio agrario número 53/2000, relativo a la dotación de tierras, promovido por campesinos del poblado La Mutua, Municipio de El Naranjo (antes Ciudad del Maíz), S.L.P.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Superior Agrario.- Secretaría General de Acuerdos.

Visto para resolver el juicio agrario número 53/2000, que corresponde al expediente administrativo agrario número 3496, en cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo número 356/2001-1, por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, el treinta de julio del año dos mil uno, relativo a la solicitud de dotación de tierras, promovido por un grupo de campesinos del poblado denominado "La Mutua", Municipio El Naranjo, antes Ciudad del Maíz, Estado de San Luis Potosí, y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito de cinco de enero de mil novecientos ochenta y uno, un grupo de campesinos del poblado denominado "La Mutua", Municipio de El Naranjo, antes Ciudad del Maíz, Estado de San Luis Potosí, solicitó al Gobernador del Estado, dotación de tierras, señalando de posible afectación al predio denominado "El Plan del Guajolote", propiedad del Gobierno Federal.

SEGUNDO. La Comisión Agraria Mixta en el Estado de San Luis Potosí, instauró el expediente respectivo el cinco de marzo de mil novecientos ochenta y uno, bajo el número 3496. La solicitud se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, el trece de marzo del mismo año. El Comité Particular Ejecutivo quedó integrado por Roberto Ahumada Paz, José Antonio Escobar Martínez y Eugenio Ruiz Ríos, como presidente, secretario y vocal, respectivamente, cuyos nombramientos les fueron expedidos por el Gobernador del Estado, el veintisiete de abril de mil novecientos ochenta y uno.

TERCERO. Mediante oficio número 277, de veintiséis de marzo de mil novecientos ochenta y uno, la Comisión Agraria Mixta designó a Alejandro Gómez del Campo, a efecto de que se trasladara al núcleo agrario de que se trata y procediera al levantamiento del censo agrario y el recuento pecuario, quien celebró la junta censal el treinta y uno de marzo del mismo año y rindió su informe el dos de abril del mismo año, señalando que el censo arrojó 198 campesinos capacitados.

La Comisión Agraria Mixta, por oficio número 486, de diez de junio de mil novecientos ochenta y uno, comisionó al ingeniero Antonio Cortés Cruz, a efecto de que llevara a cabo los trabajos técnicos informativos, el comisionado rindió su informe el veintiuno de octubre del mismo año, en el que señala que dentro del radio legal de siete kilómetros, se encuentran ubicados los ejidos definitivos denominados "El Sabinito", "El Naranjo" y "El Kilómetro 42", el comisionado en su informe señaló que dentro del radio legal se encuentran comprendidos 220 predios de los cuales solamente 22 tienen extensiones mayores a 50-00-00 (cincuenta hectáreas), pero menores a los límites de la pequeña propiedad afectable, y los demás tienen superficies que varían de 2-00-00 (dos hectáreas) a 50-00-00 (cincuenta hectáreas), y las encontró totalmente explotadas.

CUARTO. La Comisión Agraria Mixta, el once de noviembre de mil novecientos ochenta y uno, emitió dictamen negando la dotación de tierras por falta de fincas afectables dentro del radio legal.

El Gobernador del Estado emitió su mandamiento el doce de enero de mil novecientos ochenta y dos, publicado en el Periódico oficial del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, el doce de marzo del mismo año, en el mismo sentido del dictamen emitido por la Comisión Agraria Mixta.

El Delegado Agrario en el Estado, emitió su opinión el cuatro de mayo de mil novecientos ochenta y dos, proponiendo negar la acción por falta de fincas afectables dentro del radio legal.

QUINTO. En cumplimiento al oficio número 3383, de once de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, suscrito por el Consejero Agrario de la Consultoría en San Luis Potosí, el entonces Delegado Agrario de la Secretaría de la Reforma Agraria, por oficio número 461, del dos de febrero de mil novecientos ochenta y tres, comisionó al ingeniero Ricardo Madrid González, a efecto de que llevara a cabo trabajos técnicos informativos complementarios, dicho profesionista rindió su informe el cinco de julio del mismo año, manifestando que investigó el predio propiedad de Bertha Alicia Muñoz, según escritura pública del siete de octubre de mil novecientos cincuenta y ocho, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el número 327, Tomo VIII, del nueve de octubre del mismo año, con superficie original de 730-10-25 (setecientos treinta hectáreas, diez áreas, veinticinco centiáreas) y después de diversas ventas le restan 435-18-05 (cuatrocientas treinta y cinco hectáreas, dieciocho áreas, cinco centiáreas) de las cuales 40-00-00 (cuarenta hectáreas) son de temporal sembradas de caña de azúcar y el resto cerril de mala calidad, destinado al agostadero para ganado mayor. El comisionado también investigó otros treinta y tres predios propiedad de distintas personas, con superficies muy pequeñas, la menor de 2-00-00 (dos hectáreas) y la mayor de 60-00-00 (sesenta hectáreas, la mayoría de estos predios están cultivados con caña de azúcar de temporal y sus propietarios

tienen contratos con el ingenio Ponciano Arriaga, ubicado en el Municipio de El Naranjo, antes Ciudad del Maíz, Estado de San Luis Potosí.

El Delegado Agrario en el Estado, por oficio número 2085, de nueve de abril de mil novecientos ochenta y cuatro, comisionó al ingeniero Joaquín Ramírez Saldaña, para que investigara los siguientes predios:

1. "LA CABAÑA" propiedad de Bertha Alicia Muñoz.
2. "CRUZ GRANDE" propiedad de Leslie Graves.
3. Predio propiedad de Roberto Zeijas Yañez.
4. Predio propiedad de Mario González Muzquiz.
5. Predio denominado "CONGREGACION DEL TORO."
6. Predio propiedad de Roberto Blagg.

El comisionado rindió su informe el primero de julio de mil novecientos ochenta y cuatro, en el cual señala que investigó los predios que a continuación se señalan, con el resultado siguiente:

1.- Predio "LA CABAÑA" propiedad de Bertha Alicia Muñoz, según escritura pública del siete de octubre de mil novecientos cincuenta y ocho, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el número 327, Tomo VIII, del nueve de octubre del mismo año, con superficie original de 1,064-00-00 (mil sesenta y cuatro hectáreas) y después de diversas ventas le quedaron 435-18-05 (cuatrocientas treinta y cinco hectáreas, dieciocho áreas, cinco centiáreas) de las cuales 40-00-00 (cuarenta hectáreas) son de temporal sembradas de caña de azúcar y el resto de agostadero de mala calidad, donde pastan 157 cabezas de ganado mayor, como infraestructura cuenta con un baño garrapaticida, dos bordos para almacenamiento de agua, dos abrevaderos, un aljibe, una casa habitación, una báscula para pesar ganado, y 20 kilómetros de cerca de alambre.

2.- Congregación de "Santa Cruz del Toro", ubicada en el Municipio de Nuevo Morelos, Tamaulipas, propiedad de 68 diversas personas dividida en igual número de fracciones, quienes adquirieron de Octal D. Jones con superficie total de 1,700-00-00 (mil setecientas hectáreas), según escritura registrada con el número 4830, legajo 96, de diecinueve de enero de mil novecientos cuarenta y cuatro, en el Registro Público de la Propiedad de Ciudad Victoria, Tamaulipas, pero que en realidad la superficie es de 2,013-00-00 (dos mil trece hectáreas), de las cuales 812-00-00 (ochocientos doce) tienen cultivos de caña de azúcar, 501-00-00 (quinientas una hectáreas) sembradas de maíz, 150-00-00 (ciento cincuenta hectáreas) con cultivos de frijol y 550-95-37 (quinientas cincuenta hectáreas, noventa y cinco áreas, treinta y siete centiáreas), de agostadero cerril de mala calidad, utilizado para la cría de ganado mayor y menor en porciones individuales, teniendo algunos de los propietarios hasta doce cabezas de ganado mayor.

3.- Predio propiedad de Roberto Blagg, sobre este predio se indicó que se encuentra ubicado fuera del radio legal, manifestando el comisionado que existe otro predio que toca el radio legal propiedad de Hugo Cuauhtémoc y Gabriela López Leyva, con superficie de 255-50-00 (doscientas cincuenta y cinco hectáreas, cincuenta áreas) de las cuales 12-00-00 (doce hectáreas) están plantadas de árboles de mangos y limones, 8-00-00 (ocho hectáreas) cultivas con caña de azúcar, 60-00-00 (sesenta hectáreas) sembradas de pasto estrella mejorado y 83-50-00 (ochenta y tres hectáreas, cincuenta áreas) son de agostadero cerril de mala calidad y se encontraron pastando 36 novillos y 44 vacas con crías de la raza cebú-suiza y cuenta con instalaciones, tres casas habitación, cercado con alambre de púas, tiene un baño garrapaticida, dos tractores John Deere, dos bombas de agua, corral para ganado. El propietario adquirió el predio de Sara López Sierra, según escritura pública número 9080, de tres de julio de mil novecientos setenta y cinco, otorgada ante el Notario Público número 26, en la Ciudad de Veracruz, Estado de Veracruz, inscrita bajo el número 1404, Tomo XV, fojas 136, en el Registro Público de la Propiedad, el veinticuatro de septiembre de mil novecientos setenta y seis.

4.- Predio denominado "La Cruz Grande", este predio originalmente perteneció al señor Alberto Dolpher Dolpher, con superficie original de 6,480-67-39 (seis mil cuatrocientos ochenta hectáreas, sesenta y siete áreas, treinta y nueve centiáreas), según inscripción 7155, legajo 144, y sufrió la siguiente afectación agraria:

Resolución Presidencial, de cuatro de junio de mil novecientos setenta y seis, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el once de septiembre del mismo año, con 2,600-00-00 (dos mil seiscientas hectáreas) para la ampliación del ejido denominado "La Reforma", Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Del anterior propietario adquirió Leslie Graves Pachtin, quien posteriormente vendió 778-55-42 (setecientos setenta y ocho hectáreas, cincuenta y cinco áreas, cuarenta y dos centiáreas), el veinticinco de junio y dos de julio de mil novecientos setenta y seis, dividido en 9 lotes, de la siguiente manera:

a) 82-01-36 (ochenta y dos hectáreas, una área, treinta y seis centiáreas) a Samuel Humberto Sánchez Durán, están destinadas al cultivo de caña de azúcar.

b) 82-01-36 (ochenta y dos hectáreas, un área, treinta y seis centiáreas) a Jorge Enrique Tomas Rodríguez, están destinadas al cultivo de caña de azúcar.

c) 82-01-36 (ochenta y dos hectáreas, un área, treinta y seis centiáreas) a Antonio García de la Fuente, están destinadas al cultivo de caña de azúcar.

d) 82-01-36 (ochenta y dos hectáreas, un área, treinta y seis centiáreas) a Tomas Ozuna Salinas, están destinadas al cultivo de caña de azúcar.

e) 109-24-36 (ciento nueve hectáreas, veinticuatro áreas, treinta y seis centiáreas) a Ana María Ozuna Salinas, están destinadas al cultivo de caña de azúcar.

f) 100-00-00 (cien hectáreas) a María del Socorro Hernández Medina, están destinadas al cultivo de caña de azúcar.

g) 109-24-26 (ciento nueve hectáreas, veinticuatro áreas, veintiséis centiáreas) a Esperanza Cabrera Lucas, están destinadas al cultivo de caña de azúcar.

h) 82-01-36 (ochenta y dos hectáreas, un área, treinta y seis centiáreas) a Daniel Medina Acosta, están destinadas al cultivo de caña de azúcar.

Posteriormente, Socorro Méndez Villasana única heredera de Leslie Graves, fraccionó lo que quedaba de predio, con superficie de 2,418-19-43 (dos mil cuatrocientas dieciocho hectáreas, diecinueve áreas, cuarenta y tres centiáreas) en once fracciones a nombre de diferentes personas, mediante contratos de promesa de venta, condicionados a la cancelación del gravamen de un adeudo con Banca Serfín, y con el señor Raúl Arredondo Cepeda, por tal razón, no existe el fraccionamiento real en el terreno, se dedica a la ganadería y se encontraron 310 cabezas de ganado mayor y 20 caballos, como infraestructura se encontraron dos casas habitación, una galera, un embarcadero con báscula, un tanque cisterna fijo, siete pozos, y está circulado en su totalidad con cuatro hilos de alambre de púas, también se encontró una pipa para transportar agua, dos tractores caterpillar D-9 y D-8, e implementos agrícolas, el índice de agostadero es de 10-89-00 (diez hectáreas, ochenta y nueve áreas) por cabeza de ganado mayor.

5.- Predio propiedad de Mario González Musquis, quien lo adquirió en el año de mil novecientos cincuenta y seis, de Liborio Ceijas Yañez, fue afectado en su totalidad por Resolución Presidencial, del diez de junio de mil novecientos ochenta y uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de septiembre del mismo año, para la ampliación del poblado denominado "Maguey de Oriente", Municipio de Ciudad del Maíz, del Estado de San Luis Potosí, con una superficie de 1,657-22-56 (un mil seiscientos cincuenta y siete hectáreas, veintidós áreas, cincuenta y seis centiáreas), propiedad de Mario González Musquis, y 415-22-95 (cuatrocientas quince hectáreas, veintidós áreas, noventa y cinco centiáreas), propiedad de Manuel Ceijas Yañez, señalando que le quedó una excedencia de 120-00-00 (ciento veinte hectáreas) que se encuentran en posesión de los poblados "El Naranjo" y "KM. 42".

6. Predio propiedad de Manuel Cejas Yañez, con 415-00-00 (cuatrocientas quince hectáreas), como ya se dijo en el párrafo anterior, fue afectado en su totalidad.

SEXTO. El Cuerpo Consultivo Agrario emitió su dictamen, el siete de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro, proponiendo negar la acción por falta de fincas afectables en el radio legal, y ordenó iniciar de oficio el procedimiento para la creación de nuevo centro de población ejidal, previa consulta a los campesinos interesados para conocer su conformidad de trasladarse al lugar donde fuera posible establecer dicho nuevo centro de población.

El Director General de Procedimientos Agrarios, el veintinueve de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, ordenó enviar al archivo el expediente administrativo del juicio agrario que nos ocupa, en virtud de que el grupo solicitante no manifestó su conformidad para trasladarse al lugar donde fuera posible establecer el nuevo centro de población ejidal.

Inconformes con el acuerdo anterior, los integrantes del Comité Particular Ejecutivo, por escrito presentado el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete, presentaron demanda de amparo de la cual conoció el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, en el juicio de amparo número 618/97-1, y dictó sentencia el trece de abril de mil novecientos noventa y nueve, sobreyendo por una parte y por otra se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a los quejosos. En contra de dicha sentencia la Coordinadora de la Unidad Técnica Operativa de la Secretaría de la Reforma Agraria, interpuso recurso de revisión, del cual le tocó conocer al Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, el que dictó ejecutoria, el siete de octubre de mil

novcientos noventa y nueve, en el toca número 258/99, confirmando en todos sus términos la sentencia recurrida.

El Amparo y Protección de la Justicia Federal, se concedió para que la autoridad responsable, dejara insubsistente la orden de archivo del expediente de origen, y dispusiera la continuación del trámite de inconformidad que hizo valer el poblado quejoso, en contra el dictamen emitido en su contra y determinara la existencia o no de fincas afectables, en el predio donde se ubica el poblado "La Mutua" y emitiera la resolución definitiva que en derecho procediera; ello sin perjuicio de la investigación ordenada en el acuerdo de diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa, emitida por el Consejero Agrario Rafael García Simerman.

Por oficio número 0697, de dieciséis de mayo de dos mil, el Representante Regional del Centro Norte, de la Secretaría de la Reforma Agraria, comisionó al ingeniero Jorge Alvarez Baez, para dar cumplimiento al acuerdo emitido por la Unidad Técnica Operativa, de la Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de dieciocho de abril del mismo año, en cumplimiento de la citada ejecutoria de amparo, pronunciada en el toca número AR258/98, deducida del juicio de garantías 618/97, quien rindió su informe el once de junio del citado año, manifestando lo siguiente:

El predio denominado "Rancho El Estribo", con superficie de 4,398-00-00 (cuatro mil trescientas noventa y ocho hectáreas), fue incorporado a los bienes del dominio público y se destinaron al servicio de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, para la creación del Centro de Desarrollo e Investigación Ganadera, mediante Decreto Presidencial expedido el catorce de mayo de mil novecientos ochenta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio del mismo año, conformado por las siguientes fracciones:

a) "VALLE I", con superficie de 1,455-69-35.79 (un mil cuatrocientas cincuenta y cinco hectáreas, sesenta y nueve áreas, treinta y cinco áreas, setenta y nueve centiáreas), utilizado por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

b) "SIERRA DE EN MEDIO" con superficie de 1,064-71-00 (un mil sesenta y cuatro hectáreas, setenta y una áreas), utilizado por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

c) "SIERRA DEL ESTE", con superficie de 957-45-00 (novecientas cincuenta y siete hectáreas, cuarenta y cinco áreas), solicitado por la Secretaría de Desarrollo Social para que en colaboración con la Asociación Nacional Ganadera Diversificada, se constituya en reserva ecológica de la flora y la fauna.

d) "VALLE II", con superficie de 938-14-00 (novecientas treinta y ocho hectáreas, catorce áreas), fueron solicitados por los grupos denominados "Charcos de Oriente", "KM.42", "La Mutua" y "El Sarnito", todos del Municipio del Naranjo, Estado de San Luis Potosí; estos grupos, el diecisiete de junio de mil novecientos noventa y dos, firmaron una minuta comprometiéndose a distribuirse equitativamente esta superficie.

El comisionado manifestó, que el diecisiete de mayo de dos mil, se presentó en el poblado que nos ocupa, y en compañía de los solicitantes se trasladaron a la fracción del predio denominado "El Estribo" haciendo un recorrido de inspección ocular en dicho predio, comprobando que el grupo de "La Mutua", se encuentra en posesión de una superficie aproximada de 300-00-00 (trescientas hectáreas) de las cuales 270-00-00 (doscientas setenta hectáreas), se encuentran cultivadas con caña de azúcar, circuladas en su parte Norte, con siete hilos de alambres de púas, además señaló que pudo constatar la existencia de 50 casas construidas con madera y techo de palma.

300-00-00 (trescientas hectáreas) se encuentran en posesión del grupo denominado "KM 42", en su mayor parte cultivadas con caña de azúcar, en donde también encontró diez casas rústicas construidas de madera con techos de palma.

60-00-00 (sesenta hectáreas) se encontraron en posesión de un grupo denominado "El Sarnito" de las cuales 55-00-00 (cincuenta hectáreas) están cultivadas de caña de azúcar.

301-98-00 (trescientas una hectáreas, noventa y ocho áreas), fueron concedidas al Nuevo Centro de Población Ejidal "Benito Juárez y su anexo "El Potosino", mediante sentencia dictada por el Tribunal Superior Agrario, el dos de diciembre de mil novecientos noventa y siete, pendiente de ejecución, por encontrarse en trámite el juicio de amparo número 335/99, promovido por Félix Almazán Prado y otros, pertenecientes al grupo "Charcos del Oriente".

SEPTIMO. El Director Ejecutivo, de la Unidad Técnica Operativa, de la Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la Secretaría de la Reforma Agraria, por acuerdo de treinta de agosto de dos mil, declaró insubsistente el dictamen aprobado por el Cuerpo Consultivo Agrario, el siete de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro, y ordenó turnar el expediente al Tribunal Superior Agrario para su resolución definitiva.

Por auto de dieciséis de octubre del dos mil, se tuvo por radicado el presente juicio en este Tribunal Superior Agrario, registrándose bajo el número 53/2000. El auto de radicación se notificó a los interesados y se comunicó a la Procuraduría Agraria para los efectos procedentes.

Por auto de seis de noviembre del dos mil, se tuvo por reconocida la personalidad como integrantes del Comité Particular Ejecutivo del poblado de referencia a Roberto Ahumada Paz, José Antonio Escobar Martínez y Eugenio Ruiz Ríos, en su carácter de presidente, secretario y vocal, respectivamente.

Por auto de seis de febrero del dos mil uno, el Magistrado Instructor a petición de noventa y nueve campesinos que manifestaron pertenecer al grupo promovente que nos ocupa, ordenó girar oficio a la Unidad Técnica Operativa de la Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la Secretaría de la Reforma Agraria, a efecto de que se sirviera ordenar a la Representación Agraria en el Estado de San Luis Potosí, para que designara a un representante que debiera convocar a asamblea extraordinaria del grupo solicitante, a fin de que se procediera a reestructurar a los integrantes del Comité Particular Ejecutivo. Dicha asamblea tuvo verificativo el dieciséis de junio del dos mil uno, fungiendo como Representante de la Representación Agraria en el Estado, el ingeniero Ildelfonso Rodríguez Tovar, habiéndose confirmado en sus cargos a los mismos integrantes del Comité Particular Ejecutivo en funciones.

Por auto de veintiocho de agosto del dos mil uno, el Magistrado instructor negó la petición formulada por un grupo de personas que manifestaron ser solicitantes del poblado de referencia, para que se convocara a una asamblea general, a fin de corroborar la autenticidad de las firmas que contiene el acta de asamblea, de fecha trece de mayo del año en cita, argumentándose en el proveído, que dicha asamblea fue presidida y sancionada por representantes legales de la Secretaría de la Reforma Agraria, y por este hecho, el acta de asamblea reviste el carácter de documento público, y por ende, se reconoce la autenticidad de las firmas.

Los integrantes del Comité Particular Ejecutivo, por promoción del treinta de agosto del dos mil uno, acompañaron copias del convenio suscrito el veintisiete de julio de mil novecientos noventa, por el Secretario de la Reforma Agraria, el Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, el Presidente del Movimiento Nacional de los 400 pueblos y representantes de la Secretaría de Gobernación y del Gobierno del Estado de Veracruz, así como copia del convenio suscrito el diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa, por el Gobernador del Estado de San Luis Potosí, el Secretario General de Gobierno, el Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos en el Estado, el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional Campesina, el Presidente y Secretario de la Unión Local de Productores de Caña; en el mismo curso manifestaron, que mediante acta de trece de mayo del dos mil uno, presentado en este H. Tribunal, dieron de baja a solicitantes originales por haberse ausentado de su grupo y reconocieron a otros que radican en el lugar.

OCTAVO. Este Tribunal Superior Agrario dictó sentencia, el veinticinco de septiembre de dos mil uno, declarando procedente la dotación de ejido promovida por el poblado que nos ocupa, se revocó el mandamiento del Gobernador del Estado de San Luis Potosí, emitido el doce de enero de mil novecientos ochenta y dos, y se concedió por concepto de dotación de ejidos una superficie de 300-00-00 (trescientas hectáreas) que deberán tomarse del predio denominado "Valle II", propiedad de la Federación, afectables en los términos del artículo 204 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

NOVENO. Por escrito presentado el nueve de mayo de dos mil uno, ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, los integrantes del Comité Particular Ejecutivo Agrario del poblado que nos ocupa, demandaron el Amparo y Protección de la Justicia Federal, señalando como autoridades responsables a este Tribunal Superior Agrario en su carácter de autoridad ordenadora, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito número 25, y al Tribunal Unitario Agrario del Distrito número 45, el primero, con sede en la ciudad de San Luis Potosí, y el segundo, con sede en Ciudad Valles, ambos del Estado de San Luis Potosí, a la Unidad Técnica Operativa de la Secretaría de la Reforma Agraria y a la Representación Regional Centro-Norte, de la Secretaría de la Reforma Agraria.

Señalaron como actos reclamados los siguientes:

Los acuerdos recaídos en el procedimiento del juicio agrario que nos ocupa, el seis de febrero y dieciocho de abril del dos mil uno, dictados por el Magistrado instructor del Tribunal Superior Agrario, habiéndole tocado conocer al Juez Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, en el amparo indirecto número 356/2001-1, el que dictó sentencia el trece de septiembre del año dos mil uno, sobreseyendo respecto de los actos reclamados a los Tribunales Unitarios Agrarios de los Distritos números: 25 y 45, con sede en la Ciudad de San Luis Potosí y en Ciudad Valles, Estado de San Luis Potosí, respectivamente y concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a los quejosos contra los actos reclamados del Tribunal Superior Agrario, Unidad Técnica Operativa, de la Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la Secretaría de la Reforma Agraria en México, Distrito Federal y del Representante Regional del Centro-Norte de la Secretaría de la Reforma Agraria, en la Ciudad de San Luis Potosí, para los efectos señalados en la parte última del considerando quinto de dicha resolución, que a continuación se transcribe:

“QUINTO. Son substancialmente fundados los conceptos de violación suplidos en su deficiencia en términos del artículo 76 bis, fracción III de la Ley de Amparo, que hace valer la parte quejosa, en la medida que en seguida se precisará.

En efecto, la parte quejosa en su demanda de garantías aduce que el Tribunal Superior Agrario en México, Distrito Federal, viola en su perjuicio las garantías individuales consagradas en su favor por los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, toda vez que no funda ni motiva el acto reclamado ya que si bien es cierto que los miembros de los Comités Particulares Ejecutivos Agrarios pueden ser removidos por no cumplir con sus obligaciones, por acuerdo de las dos terceras partes de la asamblea, también lo es, que dicho requisito no se cumple en el caso.

Ahora bien, el artículo 16 de la Constitución General de la República, en su primera parte dispone que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papales o posesiones, sino a virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Conforme a la garantía de legalidad y seguridad jurídica implícita en esa primera parte del precepto constitucional citado, todo acto de autoridad que implique molestias en las posesiones o derechos del gobernado, debe estar adecuada y suficiente fundado y motivado.

En el concepto de que por fundar, se debe entender la expresión con precisión en el texto mismo del acto, de la ley o del precepto o preceptos legales aplicables al caso.

Y por motivar, han de señalarse, también con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario además que se adecuen los motivos que beban expresarse, con las normas que sirven de fundamento para que así se configuren las hipótesis normativas.

De las constancias que el Tribunal Superior Agrario en México, Distrito Federal, acompañó a su informe como justificación de sus actos, consistente en diversas constancias deducidas del juicio agrario número 53/2000, relativo a la solicitud de dotación de tierras promovida por el poblado denominado “La Mutua”, Municipio de El Naranjo, San Luis Potosí, constancias a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, así como del capítulo de antecedentes del acto reclamado y documentales aportadas por la parte quejosa, se advierte lo siguiente:

a).- Con fecha dieciséis de octubre de dos mil, el Tribunal Superior Agrario en México, Distrito Federal, tuvo por radicada la acción de dotación de tierras correspondiente al poblado “La Mutua”, del Municipio de El Naranjo, San Luis Potosí, la cual le fue remitida por la Unidad Técnica Operativa de la Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Reforma Agraria, en cumplimiento a la ejecutoria dictada el siete de octubre de mil novecientos noventa y nueve, por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, en el toca A.R. 258/99. (foja 119).

b).- Con fecha seis de noviembre de dos mil, se tuvo por reconocida personalidad a los promoventes del amparo, Roberto Ahumada Paz, José Antonio Escobar, Martínez y Eugenio Ruiz Ríos, en su carácter de Presidente, Secretario y Vocal, respectivamente, del Comité Particular Ejecutivo Agrario del Núcleo de Población “La Mutua”, Municipio de El Naranjo, San Luis Potosí, en términos del acta de asamblea de elección del veintitrés de marzo de mil novecientos ochenta y uno (foja 140).

c).- Por escrito de fecha dos de noviembre del año dos mil, los ahora terceros perjudicados Blas Gutiérrez Ponce, Coronado Trejo Arbizu y Francisco Ortega Campos, quienes se ostentaron como Presidente, Secretario y Vocal, respectivamente del Comité Particular Ejecutivo del poblado “LA MUTUA”, perteneciente al Municipio de El Naranjo, San Luis Potosí, solicitaron al Tribunal Superior Agrario en México, Distrito Federal, se les tuviera por reconocida su personalidad, al tenor del acta de asamblea de fecha dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y ocho y por ende, por apersonándose al mencionado procedimiento agrario, escrito al que recayó el siguiente acuerdo:

“México, Distrito Federal, a seis de noviembre de dos mil.-

Agréguese a sus autos el escrito de cuenta para que obre como corresponda, visto su contenido dígameles a los ocursoantes que no ha lugar a acordar de conformidad a lo que solicitan en virtud de que el acta de asamblea que exhiben no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 18 y 21, segundo párrafo de la Ley Federal de Reforma Agraria, por no haber asistido a la asamblea celebrada el dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y ocho, algún funcionario de la Representación Agraria en el Estado de San Luis Potosí. Notifíquese por estrados y lístese.-- Así lo acordó y firma el Magistrado Instructor Licenciado Rodolfo Veloz Bañuelos, ante la Secretaria General de Acuerdos, licenciada Claudia D. Velásquez González, que autoriza y da fe. Dos firmas”. (foja 152)

d).- Mediante ocurso de fecha veintisiete de noviembre del año dos mil, Blas Gutiérrez Ponce, Conrado Trejo Arvizu y Francisco Ortega Campos, Presidente, Secretario y Vocal, respectivamente, del Comité Particular Agrario del Poblado LA MUTUA, Municipio de El Naranjo, San Luis Potosí, solicitaron del Tribunal Superior Agrario en México, Distrito Federal, se les tuviera por designando domicilio y personas para oír notificaciones, escrito al que recayó el acuerdo que a continuación se transcribe:

“México Distrito Federal, a veintinueve de noviembre de dos mil.- Agréguese a sus autos el escrito de cuenta para que obre como corresponda, visto su contenido dígameles a los ocursoantes que de los autos del juicio agrario que nos ocupa, se desprende que los integrantes del Comité Particular Ejecutivo son personas distintas a los promoventes, por lo que una vez que acrediten la personalidad con la que se ostenta mediante el acta de asamblea de su elección en original o copia debidamente certificada por autoridad competente que cumpla con los requisitos establecidos por los artículos 18 y 21 Segundo párrafo de la Ley Federal de Reforma Agraria, se estará en posibilidad de acordar lo que conforme a derecho corresponda. Notifíquese por estrados y lístese. Así lo acordó y firma el Magistrado Instructor Licenciado Rodolfo Veloz Bañuelos, ante la Secretaria General de Acuerdos, Licenciada Claudia D. Velásquez González, que autoriza y da fe. Dos firmas”. (Foja 160)

e).- A través del escrito de fecha cinco de diciembre del año dos mil, Abel Gutiérrez Ponce y sesenta y cinco campesinos más del Censo Base de la solicitud de Dotación de tierras del poblado LA MUTUA, Municipio de El Naranjo, San Luis Potosí, pidieron al Tribunal Superior Agrario en México, Distrito Federal, pronunciara acuerdo a través del cual se ordenara al Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Cinco, en Ciudad Valles, San Luis Potosí, comisionara personal para convocara a asamblea general en el poblado citado y se ratificaran los acuerdos tomados por la asamblea general celebrada el día dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y ocho, a efecto de que se le diera legalidad jurídica al Comité Particular Agrario que se nombró en la mencionada asamblea, petición a la que recayó el siguiente proveído:

México, Distrito Federal, a ocho de diciembre de dos mil.

Agréguese a sus autos de cuenta para que obre como corresponda, visto su contenido dígameles a los ocursoantes que deberán promover a través de su Comité Particular Ejecutivo como lo establece el artículo 20 de la Ley Federal de Reforma Agraria, respecto de la impugnación de su órgano de representación el citado ordenamiento prevé la renovación mediante asamblea extraordinaria que cumpla con los requisitos que establecen los 18, 19, 32 y 35; a la asamblea deberá acudir un funcionario de la Representación Agraria en el Estado de San Luis Potosí.- Notifíquese por estrados y lístese. Así lo acordó y firma el Magistrado Instructor Licenciado Rodolfo Veloz Bañuelos ante la Secretaria General de Acuerdos, Licenciada Claudia D. Velásquez González, que autoriza y da fe. Dos firmas”.

Y Con fecha seis de febrero del presente año, dicho Tribunal, para mejor proveer el juicio agrario de donde derivan los actos reclamados y atendiendo a lo solicitado por Blas Gutiérrez Ponce y sesenta y cinco campesinos (fojas 170 a 174) dictó el acuerdo que a continuación se transcribe:

“México, Distrito Federal a seis de febrero de dos mil uno.

VISTO, para mejor proveer el juicio agrario número 53/2000, que corresponde al expediente administrativo agrario número 3496, relativo a la solicitud de dotación de tierras, promovida por un grupo de campesinos del poblado denominado “La Mutua”, Municipio de El Naranjo, antes Ciudad del Maíz, Estado de San Luis Potosí; de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por escrito de cinco de enero de mil novecientos noventa y uno, un grupo de campesinos del poblado denominado “La Mutua”, ubicado en el Municipio de Ciudad del Maíz, Estado de San Luis Potosí, solicitó al Gobernador del Estado, dotación de tierras, señalando como de probable afectación el predio denominado “El Plan del Guajolote”, supuesta propiedad del Gobierno Federal.

SEGUNDO.- La Comisión Agraria Mixta del Estado de San Luis Potosí, instauró el expediente respectivo el cinco de marzo de mil novecientos ochenta y uno, bajo el número 3496. La solicitud de dotación de tierras de referencia, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado antes citado, el trece de marzo de mil novecientos ochenta y uno. El Comité Particular Ejecutivo quedó integrado por Roberto Ahumada Paz, José Antonio Escobar Martínez y Eugenio Ruiz Ríos, como Presidente, Secretario y Vocal, respectivamente, a quienes el Gobernador del Estado les expidió sus nombramientos el veintisiete de abril de mil novecientos ochenta y uno.

La diligencia censal se llevó a cabo por el comisionado Alejandro Gómez del Campos, quien rindió su informe el dos de abril de mil novecientos ochenta y uno, del cual se desprende que resultaron 204 campesinos capacitados.

Con base en los trabajos técnicos informativos la Comisión Agraria Mixta emitió su dictamen el once de noviembre de mil novecientos ochenta y uno, en sentido negativo por falta de fincas afectables en el radio legal de afectación.

El Gobernador del Estado emitió su mandamiento el doce de enero de mil novecientos ochenta y dos, en el mismo sentido del dictamen de la Comisión Agraria Mixta.

El Delegado Agrario emitió su opinión el cuatro de mayo de mil novecientos ochenta y dos, proponiendo negar la acción por falta de fincas afectables en el radio legal de afectación.

El treinta de agosto del dos mil, la Unidad Técnica Operativa de la Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de la Reforma Agraria, en cumplimiento a la ejecutoria dictada el siete de octubre de mil novecientos noventa y nueve, por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito en el juicio de garantías número 618/97, remitió a este Tribunal Superior Agrario el expediente de la acción agraria que nos ocupa, el cual fue registrado con el número 53/2000, el dieciséis de octubre de dos mil.

En los autos del expedientillo integrado en este Tribunal Superior Agrario obra la promoción suscrita por noventa y nueve integrantes del grupo promovente del juicio agrario que nos ocupa, solicitando la reestructuración de su Comité Particular Ejecutivo por lo anterior, se formulan las siguientes:

CONSIDERACIONES:

PRIMERA.- Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos tercer transitorio del Decreto por el que se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y dos; tercero transitorio de la Ley Agraria; 1o., 9o., Fracción VIII y cuarto transitorio, fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

SEGUNDA.- Como se acredita con los antecedentes ante este Tribunal Superior Agrario compareció un grupo de noventa y nueve solicitantes de la acción de dotación de ejidos de poblado que nos ocupa, solicitando que se ordenara la reestructuración de su Comité Particular Ejecutivo, por consiguiente y como la instauración de los juicios agrarios que se iniciaron con anterioridad al decreto de Reformas del artículo 27 constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y dos, y de la Ley Agraria publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero del mismo año, resulta aplicable la Ley Federal de Reforma Agraria, y en el caso concreto los artículos 18, 19 y 21 que señalan como debe integrarse un Comité Particular Ejecutivo, el procedimiento de elección y las facultades que tiene, y el último numeral de los citados, en su segundo párrafo previene: "Los miembros del Comité Particular Ejecutivo podrán ser removidos por no cumplir con las obligaciones que les señala el artículo anterior, siempre que lo acuerden las dos terceras partes de la asamblea general, a la cual deberá ocurrir un representante de la Delegación Agraria o de la Comisión Agraria Mixta en su caso".

Proveyendo a lo solicitado por el grupo promovente, procede solicitar a la Unidad Técnica Operativa de la Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de la Reforma Agraria en el Estado de San Luis Potosí, designe a un representante, a efecto de que convoque a asamblea del grupo solicitante de la dotación de tierra que nos ocupa, a fin de que designe a los integrantes del nuevo Comité Particular Ejecutivo.

Por lo expuesto y fundado y como apoyo además en la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 18, 19, 21, 29 y 32 de la Ley Federal de Reforma Agraria, se dicta el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO.- Con copia íntegra de este acuerdo gírese oficio a la Unidad Técnica Operativa de la Subsecretaría de la Reforma Agraria, solicitándole se sirva ordenar a la Representación Agraria en el Estado de San Luis Potosí, designe a un representante, a efecto de que convoque a asamblea extraordinaria del grupo solicitante de la dotación de tierras que nos ocupa, a fin de que designe a los integrantes del Comité Particular Ejecutivo.

SEGUNDO. Notifíquese por estrados a las partes y por oficio a la Procuraduría Agraria.

Así lo acordó y firma el Magistrado instructor licenciado Rodolfo Veloz Bañuelos, ante la Secretaría General de Acuerdos licenciada Claudia Dinorah Velásquez Gozález, que autoriza y da fe. Dos firmas".

f).- Mediante escrito de fecha dieciocho de abril del año dos mil, la parte quejosa, solicitó al Tribunal Superior Agrario, se "regulara el procedimiento" dejando sin efecto el auto de fecha seis de febrero del presente año, y en su lugar dictara otro, en el que asistiera un representante de la Reforma Agraria para el efecto de que hiciera una investigación de la capacidad agraria, y con esto probar quiénes podrían ser los susceptibles beneficiarios, escrito al que recayó el acuerdo que a continuación se transcribe:

"México, Distrito Federal, a dieciocho de abril de dos mil. Agréguese a sus autos los escritos de cuenta par que produzcan los efectos legales a que haya lugar, visto su contenido dígameles a los ocursoantes que no ha

lugar a acordar de conformidad a lo que solicitan, toda vez que la Ley Agraria no contempla el recurso de revocación, consecuentemente deberán estarse a lo dispuesto por el proveído de seis de febrero del año en curso. Notifíquese por estrados y lístese. Así lo acordó y firma el Magistrado Instructor Licenciado Rodolfo Veloz Bañuelos, ante la Secretaria General de Acuerdos, Licenciada Claudia D. Velázquez González, que autoriza y da fe. Dos firmas”.

Estas dos últimas determinaciones transcritas son las que constituyen los autos reclamado en este juicio.

Hechas estas precisiones, cabe aclarar, que se procederá en primer lugar al análisis de la resolución de fecha seis de febrero del año dos mil uno, dado que en el acuerdo de dieciocho de abril del presente año, la autoridad responsable niega la petición de “regulación” del procedimiento solicitado por los quejosos, con el argumento de que la ley agraria no contempla el recurso de revocación, y como consecuencia determinó que los solicitantes debían estarse a lo señalado en aquella.

Por lo que, al remitirse la autoridad a la primera resolución (seis de febrero del dos mil uno), ello implica una reiteración de sus consideraciones, motivo por el cual, al precisar que las partes deben estarse a esa determinación, luego es ésta la que impera jurídicamente en los autos.

Pues bien, de la acuciosa lectura de la precisada resolución de fecha seis de febrero del dos mil uno, se aprecia que esta adolece de los requisitos de motivación y fundamentación, por las siguientes razones:

El Tribunal Superior Agrario en México Distrito Federal, acuerda de conformidad lo solicitado por los ahora terceros perjudicados en su escrito de fecha cinco de diciembre del año dos mil, concluyendo que debe solicitarse a la Unidad Técnica Operativa de la Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la Reforma Agraria, que ordene al Delegado Agrario en el Estado de San Luis Potosí, designe a un representante a efectote que se convoque a Asamblea del grupo solicitante de tierras, para que éstos a su vez designen a los integrantes del nuevo Comité Particular Ejecutivo.

De donde puede verse que se está encomendado la celebración de un asamblea para designar nuevos miembros o un nuevo Comité Particular Ejecutivo, e implica que, los nombrados (aquí quejosos) podrían quedar removidos de su encargo, y para ello no expresa la autoridad agraria razonamiento ni fundamento del que se aprecie la facultad del Tribunal Superior Agrario para ordenar que la Unidad Técnica Operativa designe a un representante que convoque a Asamblea en la que los solicitantes de dotación de tierras nombren a un nuevo Comité Particular Ejecutivo; esto es, de dónde emana la atribución de la responsable para iniciar el procedimiento de convocación a Asamblea, así como los motivos por los cuales, de contar con esa facultad, se hace necesaria su intervención al respecto, habida cuenta que no basta que haya llevado a cabo una relación de antecedentes del caso, sino debe plasmar, con base en dichos antecedentes, los motivos que la lleven, en el evento de que así lo estime, a actuar como lo hizo, teniendo presente que previamente había reconocido la personalidad de los aquí quejosos.

En esas condiciones, es evidente que la resolución reclamada es violatoria de garantías en perjuicio de los quejosos, y por tanto, debe concedérseles el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada para efecto de que el Tribunal Superior Agrario en México, Distrito Federal, deje insubsistente la resolución que dictó el día seis de febrero del año dos mil uno, y en su lugar dicte otra en la que tome en consideración lo considerado por este juzgado en lo atinente a su facultad para ordenar que una autoridad agraria nombre representante que convoque a Asamblea del grupo solicitante de dotación y resuelva con plenitud de jurisdicción, pero debiendo razonar y fundar suficientemente la determinación que al respeto tome, la cual deberá dictarse con libertad de jurisdicción.

En la inteligencia de que dicha concesión comprende que el auto de fecha dieciocho de abril de presente año, en el que, como ya se precisó, la autoridad responsable se remite a la resolución analizada en párrafos precedentes e igualmente el amparo se hace extensivo a los actos que se reclaman de la Unidad Técnica Operativa de la Subsecretaría del Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de la Reforma Agraria en México, Distrito Federal, y al Representantes Regional del Centro Norte, en esta Ciudad de San Luis Potosí, dado que sus actos no se impugnan por vicios propios, sino como una consecuencia de la resolución del seis de febrero de año dos mil uno, ya analizada.

Cobra puntual apoyo, por las razones que la sustentan, el criterio sustentado por el Máximo Tribunal del País, en su jurisprudencia listada con el número 204, página 166, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2001, Tomo VI, Materia Común, que dice:

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.- De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficiente fundado y motivado, entendiéndose el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales,

razones o causas inmediatas que se haya tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas”.

Así como el diverso criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia publicada con el número 264, página 178, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Segunda Sala, Séptima Epoca, que dice:

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, GARANTIA DE: Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirve de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca”.

Por otra parte, como también argumenta la quejosa en su escrito de demanda, el Tribunal Superior Agrario en México, Distrito Federal, viola en su perjuicio lo preceptuado por el artículo 8o. Constitucional, en virtud de que éste no ha pronunciado acuerdo alguno en relación al escrito de fecha dieciocho de abril del año en curso, que le fue presentado por los impetrantes del amparo, puesto que en el acuerdo de dieciocho de abril del presente año, que obra a fojas 203 de los presentes autos, no obstante que se ordenó agregar dicha promoción al expediente de donde brotan los actos reclamados, fue omiso en dictar el acuerdo correspondiente, según se advierte de la transcripción que a continuación se hace de dicho proveído:

“México, Distrito Federal a dieciocho de abril de dos mil uno. Agréguese a sus autos los escritos de cuenta para que produzcan los efectos legales a que haya lugar, visto su contenido dígameles a los ocursoantes que no ha lugar a acordar de conformidad a lo que solicitan, toda vez que la Ley Agraria no contempla el recurso de revocación, consecuentemente deberán estarse a lo dispuesto por el proveído de seis de febrero del año en curso. Notifíquese por estrados y lístese. Así lo acordó y firma el Magistrado Instructor Licenciado Rodolfo Veloz Bañuelos, ante la Secretaria General de Acuerdos, Licenciada Claudia D. Velásquez González, que autoriza y da fe. Dos firmas”.

Así, si el artículo 8o., Constitucional establece:

“Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa y que; pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario”.

Es evidente que, al no haber recaído acuerdo alguno al escrito de que se trata, no obstante haber transcurrido tiempo suficiente para ese efecto, se vulnera en perjuicio de la quejosa, las garantías contenidas en el artículo 8o. De nuestra Carta Magna, y ante ello, lo procedente es conceder al Comité Particular Ejecutivo Agrario del Núcleo de Población LA MUTUA, Municipio de El Naranjo, San Luis Potosí, la protección constitucional solicitada, a fin de que la autoridad responsable Tribunal Superior Agrario en México, Distrito Federal, con absoluta libertad de jurisdicción, de inmediato, acuerde el escrito de mérito, en los términos que conforme a derecho proceden, tomando en consideración el contenido de dicha promoción, respetando los lineamientos contemplados por el precepto constitucional invocado y lo haga del conocimiento del peticionario de garantías.”.

Para dar cumplimiento la citada ejecutoria de amparo, el Pleno de este Tribunal Superior Agrario, emitió acuerdo el cinco de abril del dos mil dos, dejando insubsistentes los acuerdos de seis de febrero y dieciocho de abril del dos mil uno, pronunciados por el Magistrado Instructor en el juicio agrario número 53/2000, relativo al procedimiento de dotación de tierras del poblado “La Mutua”, Municipio de Naranjo, Estado de San Luis Potosí, asimismo, dejó sin efectos la sentencia definitiva emitida por este Tribunal Superior Agrario, el veinticinco de septiembre de dos mil uno, y se ordenó remitir los autos al Magistrado ponente, para que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, emitiera una nueva sentencia, para que se diera respuesta al escrito al que le recayó el acuerdo de seis de febrero del dos mil uno, así como a los recibidos en la Oficialía de Partes bajo los folios números 9430 y 9411.

En cumplimiento de la ejecutoria pronunciada por el H. Juez Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, en el juicio de amparo número 356/2001-1, el Magistrado Instructor por auto de veintiséis de abril del dos mil dos, autorizó la expedición de copias certificadas de diversas constancias que obran en autos, a favor de los integrantes del Comité Particular Ejecutivo, asimismo, ordenó girar oficio a la Unidad Técnica Operativa de la Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de la Reforma Agraria, a fin de que se sirviera ordenar a la Representación Agraria en el Estado de San Luis Potosí, la designación de un representante, a efecto de que convocara a asamblea extraordinaria, a los solicitantes del poblado que nos

ocupa, para que en los términos del artículo 286, de la Ley Federal de Reforma Agraria, practicara diligencias de actualización censal.

Por oficio número 1121, de catorce de junio del dos mil dos, el Representante Regional Centro Norte de la Secretaría de la Reforma Agraria comisionó al ingeniero Idefonso Rodríguez Tovar, para que llevara a cabo las diligencias de actualización censal del núcleo solicitante, quien rindió su informe el veintidós de agosto del dos mil dos, señalando que la asamblea tuvo verificativo el nueve de agosto del citado año, por segunda convocatoria, procediendo a transcribir la parte esencial del informe:

“La asamblea general de solicitantes de tierras manifestó que varias personas solicitantes, han abandonado al grupo gestor, otros no han mostrado ningún interés en continuar los trámites del expediente de dotación de tierras, ni tampoco cooperan, de ninguna forma con el grupo solicitante, tampoco concurren a ninguna asamblea que se convoque por parte del grupo gestor, de otros se desconoce su domicilio, y algunos mas han fallecido, siendo estos los motivos por los cuales varias personas causaron baja del grupo solicitante de tierras, esto de conformidad a lo manifestado por la asamblea; continuándose con el acto de referencia y declarando lo anterior, la asamblea señaló cuales son los campesinos ingresantes, al grupo de solicitantes de tierras del poblado “La Mutua”, Municipio de “El Naranjo”, San Luis Potosí, esto en razón a que tiene varios años de estar cooperando, en todas las formas legales posibles, con el grupo promoverte de dotación de tierras, concurren con todos los actos y asambleas que son convocadas, en relación con la solicitud de tierras que se promueve, además de siempre haber mostrado un marcado interés, de ser beneficiados en la solicitud de dotación de tierras, del poblado “La Mutua”, Municipio de “El Naranjo”, San Luis Potosí, por los anteriores motivos, varios campesinos causaron alta, como solicitantes de lo antes mencionado, se hace constar en la documentación que para tal efecto se levantó misma que se anexa al presente informe.”

En dicha asamblea, se tomaron los siguientes acuerdos:

“Primero.- Ratificar en sus derechos los solicitantes a 45 (cuarenta y cinco), campesinos que pertenecen al censo básico original.

Segundo.- Dar de baja a 151 (ciento cincuenta y un) campesinos, que figuran al censo básico original de las diversas causa y motivos que se asientan en el acta de asamblea general extraordinaria de solicitantes.

Tercero.- Dar de alta a 97 (noventa y siete) campesinos, según el deseo expreso y manifiesto del grupo gestor de dotación de tierras del poblado “La Mutua”, Municipio de El Naranjo, San Luis Potosí, y por las causas y motivos que se asientan en el acta de asamblea general extraordinaria que al presente se anexa.”

Por escrito presentado en la oficialía de partes de este Tribunal Superior Agrario, el siete de noviembre del dos mil dos, los integrantes del Comité Particular Ejecutivo, formularon alegatos y solicitaron que se les diera oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas necesarias a efecto de probar que hay 637-00-00 (seiscientos treinta y siete hectáreas) afectables. El escrito anterior se proveyó mediante auto de veintidós de noviembre del mismo, ordenándose notificar a los promoventes para que en el término de diez días contados a partir de la fecha de la notificación presentaran sus pruebas y alegatos.

Por escrito de cinco de diciembre de dos mil dos, los promoventes comparecieron al procedimiento aceptando haberse notificado del auto de veintidós de noviembre del dos mil dos, solicitando que fueran tomadas en cuenta, todas y cada una de las documentales que anexaron a su escrito fechado el primero de octubre del dos mil uno, pruebas que se admitieron y se tuvieron por desahogadas por su propia y especial naturaleza.

DECIMO. Por escrito presentado el once de diciembre de dos mil dos, ante el Delegado de la Procuraduría Agraria, en el Estado de San Luis Potosí, remitido a este Tribunal Superior Agrario por dicha dependencia mediante oficio número PASC/1935/2002, Juana Emilia Escobar Martínez y otros, señalaron lo siguiente:

“JUANA EMILIA ESCOBAR MARTINEZ, con domicilio en la casa marcada con el número 54 del Andador 12 de Octubre de la Colonia PLAN DE SAN LUIS, en el MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P., y BERTA RUIZ COLLASO, (sic) con domicilio en la casa marcada con el número 210 de la Avenida Hidalgo, Colonia LA ENCANTADA, en el MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P., JOSE ANTONIO ESCOBAR MARTINEZ, con domicilio en la casa S/N, ubicada sobre la Avenida Jorge Pasquel de la Colonia La Encantada en el Municipio de El Naranjo S.L.P., con el carácter que tenemos acreditado en la RESOLUCION EMITIDA POR ESE H. TRIBUNAL, publicada en el DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION en fecha veinticuatro de enero del dos mil dos, ante Usted con el debido respeto comparecemos para exponer:

Que venimos por medio del presente escrito a solicitar se deje sin efectos la actualización censal realizada por el personal de la SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DICTADO POR EL H. TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO, la cual tenemos conocimiento que ya fue remitida al SUPREMO TRIBUNAL AGRARIO, y la cual se encuentra plagada de inconsistencias en virtud de que no se convocó en términos de ley ni se nos notificó el día y lugar para su realización, además de que sabemos que

el personal de la SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA fue inducido por los señores ROBERTO AHUMADA PAZ y EUGENIO RUIZ RIOS, integrantes del COMITE PARTICULAR EJECUTIVO, para que en su actualización censal no se incluyera a los suscritos comparecientes por no estar de acuerdo por los malos manejos que realizan con las tierras que nos fueron dotadas y de las cuales tenemos en posesión desde el año de 1994, todo esto en beneficio del señor GREGORIO BUENO ALAMILLO, quien no fue beneficiado en esta resolución y que es la persona que con todos estos movimientos censales pretende su reconocimiento junto con un grupo de gentes ajenas al grupo original, quienes ingresaron o pretenden ingresar con la aportación de importantes sumas de dinero.

Es importante mencionar que los suscritos comparecientes somos beneficiarios de la RESOLUCION EMITIDA POR ESE H. TRIBUNAL, PUBLICADA en el DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION de fecha 24 de enero del 2002, y que aparecemos con los números 82, 32 y 3 en su orden respectivamente, no omitiendo mencionar que el tercero de los comparecientes de nombre ANTONIO ESCOBAR MARTINEZ, además de beneficiario de dicha resolución soy integrante activo del COMITE EJECUTIVO DEL GRUPO LA MUTUA, lo que se demuestra con copias simples que anexamos a la presente, en las que constan tales afirmaciones.

En virtud de lo anterior nos inconformamos con los trabajos de depuración censal realizados por LA SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA, toda vez que los suscritos somos los beneficiarios originales de LA RESOLUCION de referencia, y que actualmente nos encontramos en peligro de ser desposeídos por las personas mencionadas escudándose en la actualización censal que impugnamos.

Los suscritos comparecientes somos poseionarios de nuestros terrenos desde el año 1994, y los tenemos sembrados de caña de azúcar desde el año 1995, con Crédito Refaccionario y de Aviós con el INGENIO SAN MIGUEL DEL NARANJO S.A. DE C.V. DE EL NARANJO S.L.P., Factoría que siempre nos ha pagado Percepciones, Pre-liquidaciones, Anticipos como resultado de la compra de nuestra caña de azúcar.

Por lo antes expuesto:

ANTE USTED C. DELEGADO DE LA PROCURADURIA AGRARIA EN EL ESTADO, atentamente solicitamos:

UNICO.- Se nos tenga como inconformándonos con la ACTUALIZACION CENSAL de referencia por no haberse realizado con estricto apego a derecho.

El Magistrado Instructor dictó acuerdo el tres de febrero de dos mil tres, del contenido literal siguiente:

“El tres de febrero de dos mil tres, la Secretaría General de Acuerdos, con fundamento en el artículo 22, fracción I de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, da cuenta al Magistrado Instructor, con el escrito de Juana Emilia Escobar Martínez y otros, así como el oficio número PASCP/1935/2002, signado por el Delegado Estatal de la Procuraduría Agraria, en San Luis Potosí, Estado de San Luis Potosí, registrados en la Oficialía de Partes con los números 001903 y 002616. Conste.

México, Distrito Federal a tres de febrero del dos mil tres.

Se tiene a Juana Emilia Escobar Martínez y otros, por presentados en el procedimiento del juicio agrario señalado al rubro, impugnando la actualización censal del poblado que nos ocupa llevada a cabo el nueve de agosto del dos mil dos, aduciendo que no se publicaron las convocatorias para que tuviera verificativo la asamblea de solicitantes con el fin de actualizar el censo respectivo, acompañando como prueba el oficio número 0610/002, de treinta de diciembre del dos mil dos, signado por el Presidente Municipal de El Naranjo, Estado de San Luis Potosí, haciendo constar que no se había publicado ninguna convocatoria ni sancionado algún acto de asamblea, ni trabajos de actualización censal del grupo solicitante denominado “La Mutua”, porque no se colocó en el edificio de dicha Presidencia Municipal convocatoria alguna sobre los referidos trabajos de actualización. Asimismo, el Delegado Estatal de la Procuraduría Agraria en San Luis Potosí, Estado de San Luis Potosí, remitió a este Tribunal Superior Agrario, copia del escrito que recibió suscrito por Juana Emilia Escobar Martínez y otros, solicitándole que se dejara sin efectos la actualización censal, por considerar que está plagada de inconsistencias, por no haberse notificado el día y lugar para su realización, además, señalan que el personal de la Secretaría de la Reforma Agraria fue inducido por Roberto Ahumada Paz y Eugenio Ruiz Ríos, integrantes del Comité Particular Ejecutivo, para que en la actualización censal no se les incluyera, por no estar de acuerdo con los malos manejos que realizan con la tierra que tienen en posesión desde al año de mil novecientos noventa y cuatro, en beneficio de Gregorio Bueno Alamillo.

En los términos de los escritos, téngase a los ocursoantes promoviendo incidente de nulidad de actuaciones, con fundamento en los artículos de 358 a 364 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Agraria y emplácese al Comité Particular Ejecutivo del poblado que nos ocupa, así como al ingeniero Ildefonso Rodríguez Tovar, comisionado por el Representante Regional de la Zona Centro Norte de la Secretaría de la Reforma Agraria, para la realización de la actualización censal que

se impugna, acompañándoles copia de este acuerdo y de los escritos materia de este incidente de nulidad de actuaciones; asimismo notifíquese a Juana Emilia Escobar Martínez, en su carácter de representante común de los promoventes, a través del licenciado Servando Huerta Navarro y/o P.D. Juan Padrón Martínez, en la finca marcada con el número 10 de la Avenida Jorge Pasquel, zona centro en el Municipio de El Naranjo, Estado de San Luis Potosí, para que en el término común a las partes de veinte días, previstos por el artículo 288 de la Ley Federal de Reforma Agraria, así como el artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Agraria, ofrezcan las pruebas que a su interés convengan, a fin de demostrar si se dieron o no violaciones en la actualización censal de mérito.

Requíerese a los actores incidentistas a través del licenciado Servando Huerta Navarro y/o P.D. Juana Padrón Martínez, para que señalen domicilio para recibir notificaciones en la sede del Tribunal Unitario Agrario, con el apercibimiento de que de no hacerlo en los términos del artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en la Ley Agraria, las subsecuentes notificaciones aún las que sean de carácter personal, se les harán por estrados en el propio Tribunal Unitario Agrario.

Este mismo apercibimiento deberá hacerse a los integrantes del Comité Particular Ejecutivo, así como al ingeniero Ildefonso Rodríguez Tovar.

Dígase a las partes que las pruebas deberán ser ofrecidas en el propio Tribunal Unitario Agrario.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 286 y 288 de la Ley Federal de Reforma Agraria, se dicta el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. Con copia íntegra de este acuerdo, gírese despacho al Tribunal Unitario Agrario del Distrito número 45, con sede en Ciudad Valles, Estado de San Luis Potosí, a efecto de que ordene notificar personalmente al ingeniero Ildefonso Rodríguez Tovar, en las oficinas de la Representación Regional de la Zona Centro Norte en la Ciudad de San Luis Potosí, Estado de San Luis Potosí, así como a Juana Emilia Escobar Martínez, en su carácter de representante común de los promoventes, a través del licenciado Servando Huerta Navarro, y/o P.D. Juan Padrón Martínez; además deberá notificar a Roberto Ahumada Paz, Gustavo Ríos Guzmán y Eugenio Ríos Ruiz, integrantes del Comité Particular Ejecutivo, para que en el término común a las partes de veinte días contados a partir de que surta efectos la notificación comparezcan a ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho corresponda.

SEGUNDO. Apercíbese a los actores incidentista (sic) a través del licenciado Servando Huerta Navarro y/o P.D. Juana Padrón Martínez, para que señalen domicilio para recibir notificaciones en la sede del Tribunal Unitario Agrario número 45, en Ciudad Valles, Estado de San Luis Potosí, apercibidos que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones aún las personales se les harán por edictos que se publicarán en los estrados del propio tribunal.

Este mismo apercibimiento deberá hacerse a los integrantes del Comité Particular Ejecutivo, así como al ingeniero Ildefonso Rodríguez Tovar.

TERCERO. Dígase a las partes que las pruebas deberán ser ofrecidas en el propio Tribunal Unitario Agrario.

CUARTO. Se autoriza al Tribunal Unitario Agrario del Distrito número 45, con sede en Ciudad Valles, Estado de San Luis Potosí, para admitir y desahogar las pruebas que les sean presentadas por las partes.

QUINTO. Una vez desahogado el despacho, a la mayor brevedad deberán regresarse las actuaciones para el trámite legal subsecuente.

SEXTO. Notifíquese; y por oficio a la Procuraduría Agraria.

Así lo acordó y firma el Magistrado Instructor Licenciado Rodolfo Veloz Bañuelos, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado Humberto Jesús Quintana Miranda, que autoriza y da fe.⁹ -

Por escrito presentado el cuatro de julio de dos mil tres, ante la Oficialía de Partes del Tribunal Unitario Agrario del Distrito número 45, con sede en Ciudad Valles, Estado de San Luis Potosí, Juana Emilia Escobar Martínez, por su propio derecho y como representante común de un grupo de campesinos del poblado que nos ocupa, presentó las siguientes pruebas:

1.- Oficio fechado el diecinueve de febrero de dos mil tres, suscrito por el Juez Auxiliar Municipal de El Naranjo, en San Luis Potosí.

2.- Copia simple de la sentencia dictada por el Tribunal Superior Agrario, el veinticinco de septiembre de dos mil uno, en este juicio agrario en donde obra la relación de capacitados.

3.- Copia de acta notariada levantada el diecisiete de febrero de dos mil tres, ante el Notario Público Número 1 del Distrito Judicial de la Ciudad del Maíz, en el Estado de San Luis Potosí.

4.- Oficio número 0610/002, suscrito por el Presidente Municipal, por el Secretario del Ayuntamiento y por el Síndico Municipal de El Naranjo, Estado de San Luis Potosí.

5.- Prueba confesional que deberán absolver Roberto Ahumada Paz, Gustavo Ríos Guzmán y Eugenio Ruiz Ríos, integrantes del Comité Particular Ejecutivo del poblado que nos ocupa, así como por el ingeniero Ildelfonso Rodríguez Tovar, quien fue comisionado por el Representante Regional de la Zona Centro Norte de la Secretaría de la Reforma Agraria para la realización de los trabajos censales practicados el nueve de agosto de dos mil dos.

6.- Prueba testimonial ofrecida por la actora incidentista, a cargo de las personas que se obligó a presentar en la fecha que el Tribunal designara.

7.- Prueba instrumental de actuaciones.

8.- Prueba presuncional en su doble aspecto legal y humana.

En audiencia celebrada el diez de septiembre de dos mil tres, con la asistencia de las partes se desahogaron las pruebas confesionales así como la testimonial.

Por escrito presentado el catorce de agosto de dos mil tres, ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 45, en Ciudad Valles en San Luis Potosí, los integrantes del Comité Particular Ejecutivo formularon en síntesis los siguientes alegatos:

Que la nulidad de actuaciones ejercitada por la parte actora, no era la acción procedente, sino otro tipo de acción, e invocaron el contenido del artículo primero del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como el contenido de la doctrina procesal civil que establece, que el acto procesal es nulo cuando carezca de algún o algunos de los requisitos esenciales que la ley exige para su constitución, aduciendo que este Tribunal no realizó ningún acto que pudiera ser atacado incidentalmente, sino que se trata de un acto de otra instancia, afirmando que Juana Emilia Escobar Martínez, no puede negar que se hayan fijado las convocatorias, porque asistió a la asamblea realizada el primero de agosto de dos mil dos, y como prueba de que se fijaron las convocatorias, acompañaron fotografías del lugar donde se fijaron, que la parte actora compareció después del término que le fue concedido para que presentara las pruebas de su parte, y por ello, debe tenerse por no ofrecidas las pruebas anunciadas; argumentan además que la investigación de la capacidad agraria se realizó en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, por lo que no puede ser atacada porque las ejecutorias de amparo deben ser respetadas por toda autoridad, señalando también que el incidente de nulidad de actuaciones se instauró de forma oficiosa e ilegal, porque se le dio curso a un escrito que no era propiamente una promoción de incidente, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos tercero transitorio del Decreto por el que se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de seis de enero de mil novecientos noventa y dos; tercero transitorio de la Ley Agraria; 1o, 9o, fracción VIII y cuarto transitorio, fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

SEGUNDO. Esta sentencia se dicta, en virtud de que por acuerdo plenario de cinco de abril de dos mil dos, este Tribunal Superior Agrario, dejó sin efectos la sentencias definitiva de fecha veinticinco de septiembre de dos mil uno, pronunciada por este Organismo Colegiado en el juicio agrario que nos ocupa, por haber sido requerido para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en San Luis Potosí en el juicio de amparo número 356/2001-1, presentado por los integrantes del Comité Particular Ejecutivo Agrario de poblado denominado "La Mutua", Municipio de El Naranjo, Estado de San Luis Potosí, en contra de actos, de este Tribunal Superior Agrario, derivados de los acuerdos de seis de febrero y dieciocho de abril del año dos mil uno, dictados por el Magistrado Instructor, y toda vez, que si bien es cierto, que la sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil uno, no fue señalada como acto reclamado, también lo es que, para dar cumplimiento a la citada ejecutoria, se declaró la insubsistencia de los citados acuerdos y obviamente que debía declararse la nulidad de todo lo actuado con posterioridad y entre otros actos procesales, la propia sentencia dictada el veinticinco de septiembre de dos mil uno.

TERCERO. El procedimiento seguido en el trámite de este juicio agrario se ajustó a lo que para tal efecto establecen los artículos 272, 275, 286, 287, 291, 292, 293, 304 y demás relativos de la Ley Federal de Reforma Agraria la cual resulta aplicable en los términos del citado artículo tercero transitorio del Decreto de reformas al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y dos.

CUARTO. En este juicio agrario compareció Juana Emilia Escobar Martínez y otras 65 personas, por escrito presentado el once de diciembre de dos mil dos, ante el Delegado de la Procuraduría Agraria en el Estado de San Luis Potosí, y remitido a ese Tribunal Superior Agrario por dicha dependencia mediante oficio número PASC/1935/2002, en el que solicitaron que se dejara sin efectos la actualización censal realizada por el personal de la Secretaría de la Reforma Agraria, mediante asamblea celebrada el nueve de agosto de dos mil dos, en cumplimiento al auto de veintiséis de abril de dos mil dos, dictado por el Magistrado Instructor, en el que ordenó girar oficio a la Unidad Técnica Operativa de la Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de la Reforma Agraria, a fin de que se sirviera ordenar a la representación agraria en el Estado de San Luis Potosí, la designación de un representante a efecto de que convocara a asamblea extraordinaria a los solicitantes del poblado que nos ocupa, para que en los términos del artículo 286, de la Ley Federal de Reforma Agraria, practicara diligencias de actualización censal.

El Magistrado Instructor por proveído de tres de febrero de dos mil tres, admitió a trámite el incidente de nulidad de actuaciones, con fundamento en los artículos del 358 al 364 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley agraria y ordenó enviar despacho al Tribunal Agrario del Distrito 45, con sede en Ciudad Valles, Estado de San Luis Potosí, a efecto de que emplazara al Comité Particular Ejecutivo del poblado que nos ocupa, así como al ingeniero Ildelfonso Rodríguez Tovar, comisionado por el representante regional de la Zona Centro-Norte de la Secretaría de la Reforma Agraria, para la realización de la actualización censal que se impugna, asimismo, ordenó notificar a Juana Emilia Escobar Martínez, y se concedió un término común a las partes, de veinte días, previsto por el artículo 288 de la Ley Federal de Reforma Agraria, así como el artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Agraria, para que ofrecieran las pruebas que a su interés conviniera.

La parte actora incidentista ofreció sus pruebas, por su parte el Comité Particular Ejecutivo formuló sus alegatos.

QUINTO. En primer término se procede a analizar el incidente planteado, en virtud de que tiene que ver con la capacidad colectiva del núcleo, ya que conforme al artículo 192 de la Ley Agraria, los incidentes que se planteen en los juicios agrarios, pueden resolverse conjuntamente con el principal.

Previo al análisis del incidente planteado, y para una mejor comprensión del asunto, se estima necesario hacer una relación de antecedentes.

En este Tribunal Superior Agrario, se recibió de la Secretaría de la Reforma Agraria, el expediente administrativo agrario número 3496, para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo número 356/2001-1, por el Juez Segundo en el Distrito en el Estado de San Luis Potosí, debido a que el Cuerpo Consultivo Agrario, el siete de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro, emitió dictamen proponiendo negar dotación de tierras al poblado que nos ocupa, por falta de fincas afectables en el radio legal, y ordenó iniciar de oficio el procedimiento para la creación de nuevo centro de población ejidal, previa consulta a los campesinos interesados para conocer su conformidad de trasladarse al lugar donde fuera posible establecer dicho nuevo centro de población.

Como el grupo solicitante no manifestó su conformidad para trasladarse al lugar donde fuera posible establecer el nuevo centro de población ejidal, el Director General de Procedimientos Agrarios, el veintinueve de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, ordenó enviar al archivo el expediente administrativo del juicio agrario que nos ocupa.

Inconformes con el acuerdo anterior, los integrantes del Comité Particular Ejecutivo, por escrito presentado el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete, presentaron demanda de amparo de la cual conoció el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, en el juicio de amparo número 618/97-1, y dictó sentencia el trece de abril de mil novecientos noventa y nueve, sobreseyendo por una parte y por otra se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a los quejosos. En contra de dicha sentencia la Coordinadora de la Unidad Técnica Operativa de la Secretaría de la Reforma Agraria interpuso recurso de revisión, del cual le tocó conocer al Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, el que dictó ejecutoria el siete de octubre de mil novecientos noventa y nueve, en el toca número 258/99, confirmando en todos sus términos la sentencia recurrida.

El Amparo y Protección de la Justicia Federal, se concedió para que la autoridad responsable dejara insubsistente la orden de archivo del expediente de origen, y dispusiera la continuación del trámite de inconformidad que hizo valer el poblado quejoso, en contra del dictamen emitido en su contra y determinara la existencia o no de fincas afectables, en el predio donde se ubica el poblado "La Mutua" y emitiera la resolución definitiva que en derecho procediera; ello sin perjuicio de la investigación ordenada en el acuerdo de diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa, emitida por el Consejero Agrario Rafael García Simerman.

Este Tribunal Superior Agrario, dictó sentencia el veinticinco de septiembre de dos mil uno, conforme los siguientes puntos resolutivos:

PRIMERO. Es procedente la dotación de ejido, promovida por campesinos del poblado denominado "La Mutua", Municipio El Naranjo, antes Ciudad del Maíz, Estado de San Luis Potosí.

SEGUNDO. Se revoca el mandamiento del Gobernador del Estado de San Luis Potosí, emitido el doce de enero de mil novecientos ochenta y dos, publicado en el Periódico Oficial de la citada entidad federativa.

TERCERO. Es de concederse y se concede al poblado referido en el resolutivo anterior, una superficie total de 300-00-00 (trescientas hectáreas) que se deberán tomar del predio denominando "Valle II" propiedad de la Federación, afectable en los términos del artículo 204 de la Ley Federal de la Reforma Agraria. Dicha superficie pasará a ser propiedad del poblado de referencia para constituir los derechos agrarios correspondientes a 198 campesinos capacitados relacionados en el considerando cuarto de esta sentencia, a favor de quienes el Registro Agrario Nacional deberá expedir los títulos agrarios correspondientes. La superficie concedida deberá ser localizada de acuerdo con el plano proyecto que para el efecto se elabore. En cuanto a la determinación del destino de las tierras la asamblea del poblado beneficiado resolverá de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria vigente y podrá constituir la parcela escolar, la unidad agrícola industrial para la mujer, la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud y demás áreas reservadas para el asentamiento humano.

CUARTO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; los puntos resolutivos de la misma en el Boletín Judicial Agrario; inscribáse en el Registro Público de la Propiedad respectivos; asimismo inscribáse en el Registro Agrario Nacional, para los efectos legales correspondientes.

QUINTO. Notifíquese a los interesados y comuníquese al Gobernador del Estado de San Luis Potosí, a la Procuraduría Agraria; así como al Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, para su conocimiento sobre el cumplimiento que se está dando a la ejecutoria de amparo dictada el siete de octubre de mil novecientos noventa y nueve, en el toca número 258/99; asimismo, notifíquese al Juez Cuarto de Distrito, en el Estado de San Luis Potosí, para su conocimiento del cumplimiento que se está dando a la sentencia dictada el trece de abril de mil novecientos noventa y nueve, en el amparo número 618/97-1; ejecútese y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido."

Este Organismo Colegiado, por acuerdo plenario dictado el cinco de abril de dos mil dos, dejó insubsistente la sentencia anterior, para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada el trece de septiembre del año de dos mil uno, por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, en el juicio de Amparo Indirecto número 356/2001-1, interpuesto en contra de los acuerdos, de seis de febrero y dieciocho de abril de dos mil uno, emitidos por el Magistrado Instructor, el primero, se dictó para ordenar la reestructuración del Comité Particular Ejecutivo, solicitada por noventa y nueve campesinos y en el segundo se negó la revocación del primero.

En cumplimiento de la misma ejecutoria anterior, el Magistrado Instructor, dictó acuerdo el veintiséis de abril de dos mil dos, en el que ordenó que a través de la Secretaría de la Reforma Agraria, se llevara a cabo la actualización censal de los solicitantes, con fundamento en el artículo 286 de la Ley Federal de Reforma Agraria, observando lo dispuesto por los artículos 29, 31 y 32 del citado ordenamiento legal.

Con fecha nueve de agosto de dos mil dos, el ingeniero Ildelfonso Rodríguez Tovar, comisionado por el Representante Regional Centro Norte, de la Secretaría de la Reforma Agraria, en San Luis Potosí, llevó a cabo los trabajos censales, en los que se ratificaron a 45, (cuarenta y cinco campesinos), que corresponden al censo básico y se admitieron a 97 (noventa y siete nuevos campesinos), haciendo un total de 142, (ciento cuarenta y dos), los campesinos censados).

El censo anterior, es el que constituye la materia del incidente de nulidad de actuaciones, en virtud, de que Juana Emilia Escobar Martínez, en su carácter de representante de un grupo de campesinos del poblado que nos ocupa, solicitó que se dejara sin efectos la actualización censal.

SEXTO. Analizadas las pruebas ofrecidas por Juana Emilia Escobar Martínez, en primer lugar nos ocuparemos del estudio de la prueba instrumental de actuaciones; relativa al acuerdo de veintiséis de abril de dos mil dos.

A foja número 320 del tomo I del expediente de actuaciones de este Tribunal Superior Agrario, obra el acuerdo del veintiséis de abril de dos mil dos, emitido por el Magistrado Instructor, en el que ordenó girar oficio a la Unidad Técnica Operativa de la Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la Secretaría de la Reforma Agraria, a fin de que se sirviera ordenar a la representación agraria en el Estado de San Luis Potosí, a efecto de que designara un representante que se encargara de convocar a Asamblea Extraordinaria a los solicitantes del poblado "La Mutua", Municipio de El Naranjo, Estado de San Luis Potosí, para que se

practicaran diligencias de actualización censal, debiendo previamente lanzar las convocatorias de ley de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, 31 y 32 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

Con fecha nueve de agosto de dos mil dos, se realizó el levantamiento del censo agrario por el ingeniero Ildefonso Rodríguez Tovar, Comisionado por el representante regional Centro Norte de la Secretaría de la Reforma Agraria en la Ciudad de San Luis Potosí, Estado de San Luis Potosí, habiéndose ratificado en sus derechos agrarios a cuarenta y cinco campesinos que aparecen en el censo básico original, y se dieron de baja a ciento cincuenta y un campesinos del censo básico, y se reconocieron como de nuevo ingreso a noventa y siete campesinos, cuyos nombres obran a fojas de la 14 a la 18 del tomo III.

El Comisionado rindió su informe el veintidós de agosto de dos mil dos, al que anexó las convocatorias, así como el acta respectiva levantada el nueve de agosto de dos mil dos, la primer convocatoria aparece expedida el dieciocho de julio de dos mil dos, por el ingeniero Ildefonso Rodríguez Tovar, conteniendo el sello de la Secretaría de la Reforma Agraria, Representación Regional Centro Norte en San Luis Potosí, San Luis Potosí, y certificada por Eugenio Ruiz Ríos, Juez Auxiliar de la Congregación La Mutua; Municipio de El Naranjo, Estado de San Luis Potosí, que contiene el sello respectivo de dicha dependencia. El primero de agosto del citado año, se levantó el acta de no verificativo, por el ingeniero Ildefonso Rodríguez Tovar, y en esa fecha expidió la segunda convocatoria, que contiene los mismos requisitos formales de la primera, habiéndose celebrado la asamblea respectiva, el nueve del mismo mes y año citado, obteniéndose como resultado ciento cuarenta y dos campesinos capacitados; a estas constancias se le reconoce valor pleno en los términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por haberse expedido por Funcionarios Públicos en pleno ejercicio de sus funciones.

A la prueba documental privada, ofrecida por la actora incidentista, de la supuesta constancia expedida por Noé Ríos Segura, Juez Auxiliar de la Congregación "La Mutua", Municipio de El Naranjo, Estado de San Luis Potosí, en la que se hace constar que dicha autoridad no tuvo conocimiento de que se hubiesen realizado trabajos de actualización censal del grupo "La Mutua", no se le reconoce valor, toda vez que dicha autoridad por oficio dirigido al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46, con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí, fechado el dos de julio de dos mil tres y que obra a foja 827 del tomo II, del expediente de este juicio agrario, desmintió el contenido de la prueba ofrecida por Juana Emilia Escobar Martínez, señalando que no firmó ni selló dicho documento y para demostrar que no es la firma que contiene dicho documento, acompañó su credencial expedida por el Instituto Federal Electoral, Registro Federal de Electores, comparando ambos documentos, resulta evidente que los rasgos extrínsecos de las firmas son totalmente diferentes, y como lo afirma dicha autoridad el primer documento no contiene el sello de la dependencia que representa, por lo que a la prueba ofrecida por Juana Emilia Escobar Martínez, no se le reconoce ningún valor, por existir presunción fundada de ser un documento apócrifo.

A la documental pública, relativa a la sentencia dictada por este Tribunal Superior Agrario, el veinticinco de septiembre de dos mil uno, con la que pretende acreditar la relación de 198 (ciento noventa y ocho), capacitados que contiene la misma, cabe señalar que se dejó insubsistente por Acuerdo Plenario emitido el cinco de abril de dos mil dos, por este Organismo Colegiado, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo pronunciada el trece de septiembre del año dos mil uno, por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, en el juicio de amparo número 356/2001-1.

A la prueba documental pública, consistente en la escritura pública número 7,117 que obra a fojas de la 483 a la 490 del tomo I, levantada ante la fe del Notario Público Número 1 en el Distrito Judicial de Ciudad del Maíz, Estado de San Luis Potosí, en la que se hace constar la comparecencia de Juana Emilia Escobar Martínez y otras 65 personas, ante dicho Fedatario Público, proporcionaron en lo general, el lugar de origen, su domicilio actual, así como la fecha de su nacimiento y su número de credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral, del Registro Federal de Electores, y de los datos proporcionados se conoce que únicamente Régulo Prado Hernández, Genaro Rodríguez Campos, Alberto Ríos García, Francisco Ríos Martínez, Araceli Martínez Cedillo y Rosa Laura Ríos Segura, tienen su domicilio en Congregación "La Mutua", todos los demás radican en otras poblaciones.

Todos los campesinos que comparecieron ante el notario público, celebraron asamblea el dieciséis de febrero del año dos mil tres, y designaron como integrantes del Comité Particular Ejecutivo a Juana Emilia Escobar Martínez, Rosendo Rodríguez Ponce y Juan Ponce Martínez, como Presidente, Secretario y Tesorero (sic) respectivamente, y con dicho documento por escrito presentado el veintisiete de febrero de dos mil tres ante la Oficialía de Partes del Tribunal Superior Agrario, solicitaron el reconocimiento de tal carácter a las personas mencionadas y por auto de veintidós de marzo de dos mil tres, el Magistrado Instructor, negó el reconocimiento, aduciendo que el acta de asamblea, no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 18 y 21 segundo párrafo de la Ley Federal de Reforma Agraria.

A la prueba documental ofrecida, que corresponde a la constancia expedida por el Presidente, Secretario y Síndico del Ayuntamiento Municipal de El Naranjo, Estado de San Luis Potosí, dirigida a José Antonio Escobar Martínez Secretario del C.E.L. (sic) de La Mutua (sic) en la que hacen de su conocimiento que ningún funcionario municipal ha sancionado ninguna asamblea y en los edificios públicos de dicha Presidencia

Municipal no se ha colocado convocatoria alguna; dicha prueba no les favorece a los oferentes, toda vez que el artículo 32 de la Ley Federal de Reforma Agraria, establece como obligación que las convocatorias se deberían fijar en los lugares más visibles del poblado, que en este caso resulta ser "La Mutua", y por lo tanto, no se tenía la obligación de fijar convocatorias en el edificio de la sede de la Presidencia Municipal, ubicada en el poblado El Naranjo, Estado de San Luis Potosí.

A la prueba confesional, desahogada por Roberto Ahumada Paz, Gustavo Ríos Guzmán y Eugenio Ruiz Ríos, en su carácter de integrantes del Comité Particular Ejecutivo del poblado que nos ocupa, no le beneficia a la oferente actora incidentista, en virtud de que los absolventes coincidieron en señalar que si se publicaron las convocatorias, que se señaló el lugar donde se celebraría la asamblea de actualización censal, y que si se celebró dicha asamblea, a esta prueba se le reconoce pleno valor en virtud de que fue desahogada el diez de septiembre de dos mil tres, ante el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 45, con sede en Ciudad Valles; Estado de San Luis Potosí, asistido de su Secretario General de Acuerdos, quien autorizó y dio fe. A esta prueba se le reconoce valor pleno en los términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por haber intervenido autoridades en el pleno ejercicio de sus funciones.

Analizada la prueba confesional, desahogada por el ingeniero Ildelfonso Rodríguez Tovar, a la cual se le reconoce valor pleno en los términos del artículo 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por haberse hecho por persona capacitada para obligarse, con pleno conocimiento, sin coacción o violación respecto de hechos propios, con la que confesó haber sido comisionado por el Representante Regional de la Zona Centro Norte, de la Secretaría de la Reforma Agraria, para la realización de una actualización censal en el poblado "La Mutua", Municipio de El Naranjo, Estado de San Luis Potosí, que el censo lo llevó a cabo el nueve de agosto de dos mil dos, que conoce al señor Gregorio Bueno Alamillo y que conoce además, las formalidades que deben llevarse a cabo para la actualización de un censo poblacional, porque conoce la Ley Federal de Reforma Agraria, y que no omitió fijar las cédulas de las convocatorias, para la celebración de la asamblea en que se llevaría a cabo el censo agrario y que no celebró la asamblea de propia autoridad.

Esta confesional, no le favorece a la parte actora incidentista, porque el comisionado por la Secretaría de la Reforma Agraria ingeniero Ildelfonso Rodríguez Tovar, con toda claridad expresó que si levantó el censo agrario el nueve de agosto de dos mil dos y que previamente se fijaron las cédulas de las convocatorias para la celebración de dicha asamblea.

A la prueba testimonial, ofrecida por Juana Emilia Escobar Martínez, parte actora incidentista a cargo de Diana Margarita Míreles Prado y Victoria Guadalupe Míreles Prado, no le beneficia a la oferente, en virtud de que en las preguntas esenciales, relativas a que si sabían y les constaban que se hubieran emitido las convocatorias para la celebración de la asamblea de la actualización censal en el poblado "La Mutua", no obstante que fueron contestes en que no les constan y que no vieron ninguna convocatoria, y que no se dieron cuenta que se hubiera celebrado la asamblea de actualización censal, en las repreguntas incurrieron en contradicciones, Diana Margarita Míreles Prado declaró que es vecina del poblado "La Mutua", que a los integrantes del Comité Particular Ejecutivo únicamente los conoce de vista, y más adelante señaló que no conoce exactamente quienes son los integrantes del Comité Particular Ejecutivo que nada más conoce a algunas personas que fueron beneficiadas, y que no vive en La Mutua, pero que continúa yendo a ese lugar porque allá están sus abuelitos y va casi todos los días y en preguntas posteriores afirmó que no recuerda en que día de la semana cayó el nueve de agosto, pero que estaba segura que no se hizo ninguna asamblea, porque es un poblado chico en donde se dan cuenta de todo, y por otra parte, manifestó que sabe que no aparecieron las convocatorias, porque en esa fecha vivía en ese lugar y que en ningún momento vio las convocatorias, como se advierte incurrió en muchas contradicciones, al señalar que vivía en "La Mutua", y más adelante negó que viviera en dicho lugar, que conocía al Comité Particular Ejecutivo y después negó conocerlos; por su parte Victoria Guadalupe Maldonado Prado, al formularsele repreguntas por el demandado incidentista declaró que conoce a casi todas las personas del poblado "La Mutua", que conoce a los integrantes del Comité Particular Ejecutivo pero que no sabe sus nombres y más adelante señaló que no conoce exactamente quienes son los integrantes del Comité Particular Ejecutivo, que nada más conoce a algunas personas que fueron beneficiadas, como se advierte, incurre en contradicciones al señalar primeramente que si conoce a los integrantes del Comité Particular Ejecutivo y posteriormente manifiesta no conocerlos.

De un análisis adminiculado de las pruebas ofrecidas por la parte actora incidentista, y confrontadas unas frente a las otras, con fundamento en el artículo 97 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Agraria como lo previene el artículo 167 de la Ley Agraria, no se acreditó que no hubiesen sido publicadas las convocatorias con base en las cuales se celebró la asamblea de nueve de agosto de dos mil dos, en el poblado "La Mutua", mediante la cual se actualizó el censo agrario.

El Comité Particular Ejecutivo del poblado "La Mutua", por escrito recibido el catorce de agosto de dos mil tres, en la Oficialía de Partes del Distrito 45, con sede en Ciudad Valles, Estado de San Luis Potosí, ofreció alegatos, que devienen esencialmente infundados por las siguientes consideraciones:

Juana Emilia Escobar Martínez y otros, promovieron ante el Delegado de la Procuraduría Agraria en el Estado de San Luis Potosí, que se dejara sin efectos la actualización censal realizada por personal de la Secretaría de la Reforma Agraria, el nueve de agosto de dos mil dos, escrito que fue remitido por dicha dependencia a este Tribunal Superior Agrario, para la atención procedente, en su ocurno se afirmó que no se publicaron las convocatorias para la asamblea en que se actualizó el censo agrario del poblado "La Mutua", y para conceder la garantía de audiencia por acuerdo de tres de febrero de dos mil tres, el Magistrado Instructor acordó en la vía incidental notificar a las partes para que ofrecieran sus pruebas y alegatos, en esta tesitura no le asiste la razón a los integrantes del Comité Particular Ejecutivo, en el sentido de que no era la vía indicada para resolver esta controversia, porque contrario a lo que afirman los demandados incidentistas, si son actuaciones procesales las que se impugnaron de eficacia jurídica, porque al haberse solicitado que se dejara sin efectos la actualización censal, obviamente que se estaba demandado su nulidad, y si bien es cierto, que la actualización censal se llevó a cabo por autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria, también lo es, que lo hicieron en cumplimiento del acuerdo emitido por el Magistrado Instructor, por ende si se trata de una actuación judicial.

Con todo el caudal probatorio, cabe concluir que la parte actora incidentista Juana Emilia Escobar Martínez, y otros, no acreditaron con elemento de prueba alguna, que se hubiesen cometido violaciones que establecen los artículos 31 y 32 de la Ley Federal de Reforma Agraria, para llevar a cabo una actualización censal, toda vez, que la petición para dejar sin efectos dicha actualización, llevada a cabo el nueve de agosto de dos mil dos, se sustentó en que no se convocó en términos de la ley, ni se les notificó el lugar y fecha para su realización, hecho que no se probó con ningún medio de convicción, por ende, no ha lugar a declarar dicha nulidad.

SEPTIMO. La capacidad individual y colectiva del grupo solicitante, ha quedado acreditada de conformidad con los artículos 197, fracción II, 200 y 220 de la Ley Federal de Reforma Agraria; en efecto, la diligencia censal levantada el treinta y uno de marzo de mil novecientos ochenta y uno, arrojó más de 20 (veinte) campesinos capacitados, y finalmente con la diligencia de actualización censal celebrada el nueve de agosto del dos mil dos, en la que resultaron 142 (ciento cuarenta y dos) campesinos capacitados, siendo sus nombres los siguientes:

1. Roberto Ahumada Paz, 2. Eugenio Ruiz Ríos, 3. María de Lourdes Escobar Martínez, 4. Florentino Ruiz Coyazo, 5. Margarita Ruiz Ponce, 6. Rodrigo de la Torre Franco, 7. Silverio Maldonado Rivera, 8. Edminia López Maldonado, 9. Daniel Ríos Rodríguez, 10. Bertha Ruiz Coyazo, 11. Noé Ríos Ceguera, 12. Cirilo Ortega Ruiz, 13. Víctor Gutiérrez Ponce, 14. Eleazar Escobar Martínez, 15. Celestino Hernández Gómez, 16. Celestino Hernández Alonso, 17. Ramón Ortiga Ríos, 18. Isabel Ruiz Ponce, 19. Rodrigo Ríos Rodríguez, 20. José de Jesús Ríos Guzmán, 21. Yolanda Ríos Guzmán, 22. Gustavo Ríos Guzmán, 23. Rodrigo Ríos Guzmán, 24. Matías Ponce Martínez, 25. Laura Ponce Rodríguez, 26. Guadalupe Ruiz Ponce, 27. Modesto Ortega Ríos, 28. Felipe Rodríguez Gamez, 29. Erasmo Rodríguez Gamez, 30. Héctor Ponce González, 31. Enrique Rodríguez Castillo, 32. Susana Escobar Martínez, 33. Francisco Ortiga Ríos, 34. Raymundo Rodríguez Castillo, 35. Ricardo Rodríguez Castillo, 36. Calisto Ríos Rinconada, 37. Aniceto Niño Rodríguez, 38. Pedro Alfonso Ortiga Martínez, 39. José Arturo Ortega Ríos, 40. Lucano Niño Velázquez, 41. Pedro Ortiga Robledo, 42. Alma Luz Ortega Rodríguez, 43. Antonio Acuña Ríos, 44. Juana María Ríos Guzmán, 45. Martín Rodríguez Pérez, 46. Gregorio Buena Alamilla, 47. Jesús Jiménez Ahumada, 48. Antonio Acuña Espriella, 49. Eva Laura Acuña Ríos, 50. Carlota Torres Castillo, 51. Sabina Ahumada Paz, 52. Petra Colchado Pérez, 53. Juan Rubén Maldonado Maldonado, 54. Maximino Avalos Hernández, 55. José Inés Jiménez Ahumada, 56. María Santos Hernández Ponce, 57. Valentín Larraga Hernández, 58. José Hernández Ortega, 59. Julio Iván Hernández Torres, 60. José Moreno Barajas, 61. Ramona Patiño Escamilla, 62. Domingo Castillo Martínez, 63. Amanda Campos Lira, 64. Claudia Verónica Sánchez González, 65. Margarito Luna Rosas, 66. Carlota Ortega Martínez, 67. J. Pablo Espinosa Camacho, 68. Belén Rodríguez Gamez, 69. Alicia Amaro Salinas, 70. María Luisa Martínez Morales, 71. Hermelinda Sánchez Rodríguez, 72. María Ventura Gamez Ponce, 73. José Luis Castillo Campos, 74. Reyna Cedillo Martínez, 75. Angel González Ricaño, 76. Pedro Alberto Pulido Ortega, 77. Adán Hernández Ortega, 78. Juana Hernández Ortega, 79. Celia Maldonado Zapata, 80. Arturo Portillo Nájera, 81. Ernestina González Torres, 82. Margarita Vázquez Saldaña, 83. María del Carmen Ortiga Martínez, 84. Martha Ortega Martínez, 85. Alberta Terán Gutiérrez, 86. Emilio Ibarra Sierra, 87. Froylán Lucio Cano, 88. Roberto Espinosa Ferrioli, 89. Daniel Hernández Ortiga, 90. Leo Castillo Silva, 91. Tomás Maldonado Ortiga, 92. Melitón Ríos Maldonado, 93. Sergio Ponce Rodríguez, 94. Rodrigo Ríos Plasencia, 95. Gregorio Maldonado Ortega, 96. Antonia Camacho Ruiz, 97. Antero Ramírez Rubio, 98. Eladia Hernández de la Cruz, 99. María Guadalupe Ríos Hernández, 100. Araceli Mayorga Castillo, 101. Ramón Ortega Mayorga, 102. Domingo Ruiz Hernández, 103. María Chávez Colunga, 104. Bernardino Rivera García, 105. Cecilia Ruiz Hernández, 106. María Juanita Camacho Ruiz, 107. Ricardo Campos Cervantes, 108. Othón Rivera García, 109. Eulogio Jiménez Ahumada, 110. Gloria Ceballos Hernández, 111. Demetrio Chávez

Colunga, 112. Julia Dorotea Martínez Rodríguez, 113. María Leticia Guadalupe Camacho Ruiz, 114. Alfredo Ruiz Hernández, 115. Ana Luisa Montalvo Martínez, 116. Humberto Ruiz Hernández, 117. Vicente Maldonado Torres, 118. Juvenal Ríos Guzmán, 119. Candelario Martínez Cedillo, 120. Daniel Rey Hernández Escobar, 121. Reynalda Torres Castillo, 122. Alicia Ríos Hernández, 123. María Concepción Sánchez Rodríguez, 124. Juan Alejandro Sánchez Rodríguez, 125. Juana Esthela Gutiérrez Ponce, 126. Ismael Sánchez Ramírez, 127. Adanery Hernández Escobar, 128. José Luis Ramos Hernández, 129. Graciano Perales Villanueva, 130. Jesús Silva Plasencia, 131. María Elena Silva Murgo, 132. J. Juan Maldonado Colchado, 133. Ramón Pineda, 134. Sánchez, Erika Valentina Márquez Guzmán, 135. Salomón Ruiz Ponce, 136. Yahima Guadalupe Ponce Hernández, 137. María Guzmán Gutiérrez, 138. Enoc Castillo Silva, 139. Juan José Altamirano Maldonado, 140. Jaime Enrique Olvera Martínez, 141. Josefa Ríos Ponce y 142. José Luis Buena Alamillo.

A la anterior actualización censal, llevada a cabo el nueve de agosto de dos mil dos, se le reconoce plena validez, por haberse levantado en asamblea previamente convocada con la asistencia de funcionarios de la representación agraria en el Estado, cumpliéndose con los requisitos de los artículos 286 y 287 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

En consecuencia, debe tenerse a la asamblea de solicitantes, en ejercicio de sus facultades, actualizando su censo y modificando el censo levantado el treinta de marzo de mil novecientos ochenta y uno, así como el censo levantado en asamblea celebrada el trece de mayo de dos mil uno.

OCTAVO. Analizados los informes relativos a los trabajos técnicos informativos que obran en autos del expediente que se estudia, en primer lugar, tenemos el informe rendido por el ingeniero Antonio Cortés Cruz, del cual se conoce que dentro del radio legal, se encuentran ubicados los ejidos definitivos: "El Sabinito", "El Naranja", "El Km. 42", el comisionado señaló que investigó doscientos veinte predios, todos ellos con superficies menores a los límites de la pequeña propiedad inafectable y los encontró totalmente explotados, por lo tanto, no son susceptibles de afectación.

En autos también obra el informe rendido por el ingeniero Ricardo Madrid González, de cinco de julio de mil novecientos ochenta y dos, del cual se conoce que investigó un predio propiedad de Bertha Alicia Muñoz, con superficie de 435-00-00 (cuatrocientas treinta y cinco hectáreas) de las cuales 40-00-00 (cuarenta hectáreas) se encontraron cultivadas de caña de azúcar y el resto de la superficie corresponde a terrenos cerriles de mala calidad destinados al agostadero para ganado mayor. El comisionado también investigó otros treinta y tres predios, propiedad de igual número de personas con superficies muy pequeñas, el mayor, con 60-00-00 (sesenta hectáreas) y todos los predios se encontraron cultivados de caña de azúcar; por lo tanto, como se trata de superficies muy pequeñas no son susceptibles de afectación.

También obra en autos, el informe rendido por el ingeniero Joaquín Ramírez Saldaña, de primero de julio de mil novecientos cincuenta y ocho, este comisionado investigó el predio denominado "La Cabaña, propiedad de Bertha Alicia Muñoz con el mismo resultado del ingeniero Ricardo Madrid González. También investigó el predio denominado "Santa Cruz del Toro" con superficie real de 2,013-00-00 (dos mil trece hectáreas), propiedad de sesenta y ocho personas, se encontró cultivado de caña de azúcar, de maíz, frijol y otra parte destinado a la cría de ganado. Del mismo informe se conoce que el comisionado también investigó un predio propiedad de Hugo Cuauhtémoc y Gabriel López Leyva, en el cual encontraron 12-00-00 (doce hectáreas), cultivadas con árboles frutales, 8-00-00 (ocho hectáreas), con caña de azúcar, 60-00-00 (sesenta hectáreas), con pasto estrella y 83-50-00 (ochenta y tres hectáreas, cincuenta áreas), de agostadero cerril en donde se encontraron pastando treinta y seis novillos y cuarenta y cuatro vacas.

En este mismo informe, aparece que se investigó el predio denominado "Cruz Grande", del cual se dice, que originalmente tuvo una superficie de 6,480-67-39 (seis mil cuatrocientas ochenta hectáreas, sesenta y siete áreas, treinta y nueve centiáreas), propiedad de Alberto Dolpher Dolpher, a este predio se le afectaron 2,600-00-00 (dos mil seiscientas hectáreas), para el poblado denominado "La Reforma", Municipio de Nuevo Laredo, Estado de Tamaulipas. De este predio adquirió Leslie Graves Pachtin, 778-55-42 (setecientos setenta y ocho hectáreas, cincuenta y cinco áreas, cuarenta y dos centiáreas), y en el año de mil novecientos setenta y seis, lo enajenó en nueve fracciones a favor de igual número de personas, la fracción mayor, es de 109-24-26 (ciento nueve hectáreas, veinticuatro áreas, veintiséis centiáreas) y todas estas fracciones se encontraron cultivadas de caña de azúcar. A este predio en el momento de la inspección le restaban 2,418-19-43 (dos mil cuatrocientos dieciocho hectáreas, diecinueve áreas, cuarenta y tres centiáreas) de agostadero con un índice de 10-89-00 (diez hectáreas, ochenta y nueve áreas), por cabeza de ganado mayor.

Del informe que nos ocupa, también se conoce que un predio que perteneció a Mario González Muzquis, se afectó en su totalidad para el poblado denominado "Magüey de Oriente", Municipio de Ciudad del Maíz, Estado de San Luis Potosí.

De acuerdo con los informes de los anteriores comisionados, ninguno de los predios señalados puede ser susceptible de afectación tomando en cuenta la superficie, la calidad de las tierras y el régimen de propiedad; en efecto, los artículos: 249, 250 y 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria, establecen que son inafectables para satisfacer necesidades agrarias los predios que no excedan de: 100-00-00 (cien hectáreas), de riego, 200-00-00 (doscientas hectáreas), de temporal, 400-00-00 (cuatrocientas hectáreas), de agostadero o la superficie necesaria para mantener hasta 500 (quinientas), cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, 800-00-00 (ochocientas hectáreas), de monte, 150-00-00 (ciento cincuenta hectáreas), dedicadas al cultivo de algodón, 300-00-00 (trescientas hectáreas), cuando se dediquen al cultivo del plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, cocotero, vid, olivo, quina, vainilla, cacao o árboles frutales.

De acuerdo con las superficies de los predios investigados, es obvio, que ninguno rebasa los límites de la pequeña propiedad, además de que ninguno ha permanecido inexplorado por más de dos años consecutivos, y en consecuencia no se actualiza ninguno de los supuestos de afectación respecto de los anteriores predios. Se llega a esta conclusión si tomamos en cuenta que a los informes de los comisionados anteriores se les reconoce pleno valor en los términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de documentos públicos, por haber sido elaborados por funcionarios públicos en pleno ejercicio de sus funciones.

NOVENO. También obra en autos el informe del ingeniero Jorge Alvarez Baez, de once de junio de dos mil, al que acompañó copia del Diario Oficial de la Federación, de dos de junio de mil novecientos ochenta, en el que aparece publicado el Decreto Presidencial, de catorce de mayo del mismo año, mediante el cual se incorporaron a bienes del dominio público y se destinaron al servicio de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, 4,398-00-00 (cuatro mil trescientas noventa y ocho hectáreas), de las cuales el comisionado manifestó que el predio denominado "Valle II" con superficie de 938-214-00 (novecientas treinta y ocho hectáreas, doscientas catorce áreas), fue solicitado por los poblados denominados "Charcos de Oriente", KM. 42", "La Mutua" y "El Sarnito" y que al llevar a cabo la investigación constató que el poblado "La Mutua" se encontraba en posesión de 300-00-00 (trescientas hectáreas), de las cuales 270-00-00 (doscientas setenta Hectáreas), se destinan al cultivo de caña de azúcar y sin indicar en cuanto superficie, señaló que existen cincuenta casas construidas de madera y techos de palma. El resto de la superficie se encuentra en posesión de los demás poblados que se señalan en este párrafo.

A fojas quince del legajo ocho, obra la minuta de la reunión de concertación celebrado entre los poblados señalados en el párrafo anterior en el que acordaron que independientemente de la superficie que se pusiera a disposición para satisfacer sus necesidades agrarias, se la distribuirían en partes iguales.

A fojas ciento ochenta y dos, del legajo uno, obra el acta levantada el ocho de noviembre de mil novecientos noventa y tres, en la que consta que la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, hizo entrega material del predio denominado "Valle II" con superficie de 938-214-00 (novecientas treinta y ocho hectáreas, doscientas catorce áreas) a favor de la Secretaría de la Reforma Agraria, para satisfacer necesidades agrarias.

Por todo lo anterior, resulta procedente conceder al poblado denominado "La Mutua", Municipio El Naranjo, antes Ciudad del Maíz, Estado de San Luis Potosí, una superficie de 300-00-00 (trescientas hectáreas), que se deberán tomar del predio denominando "Valle II" propiedad de la Federación, afectable en los términos del artículo 204 de la Ley Federal de la Reforma Agraria. Dicha superficie pasará a ser propiedad del poblado de referencia para constituir los derechos agrarios correspondientes a 198 campesinos capacitados relacionados en el considerando cuarto de esta sentencia. La superficie concedida deberá ser localizada de acuerdo con el plano proyecto que para el efecto se elabore. En cuanto a la determinación del destino de las tierras la asamblea del poblado beneficiado resolverá de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria vigente y podrá constituir la parcela escolar, la unidad agrícola industrial para la mujer, la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud y demás áreas reservadas para el asentamiento humano.

Analizadas las pruebas aportadas por el Comité Particular Ejecutivo en el ocurso recibido en Oficialía de Partes, el primero de octubre del dos mil uno, y reiteradas en su promoción presentada el cinco de diciembre del dos mil dos, se tiene que ante la Secretaría de la Reforma Agraria el poblado que nos ocupa, se inconformó con el dictamen emitido por el Cuerpo Consultivo Agrario, el siete de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro, dicha constancia no modifica la conclusión alcanzada toda vez que los dictámenes del Cuerpo Consultivo Agrario, para este Organismo Colegiado, son meras opiniones, y no tienen carácter vinculatorio.

Con las copias del Diario Oficial de la Federación del dos de junio de mil novecientos ochenta, se acredita que fue publicado el Decreto Presidencial emitido el catorce de mayo de mil novecientos ochenta, relativo a la incorporación de bienes al dominio público, señalados en el párrafo anterior.

Con la prueba aportada, relativa al informe justificado rendido por el Director General del Patrimonio del Gobierno Federal, en el juicio de amparo número 618/97, promovido por el Comité Particular Ejecutivo Agrario del poblado que nos ocupa, lo único que se acredita es, que dicha autoridad rindió su informe a la correspondiente autoridad judicial en relación con dicho juicio de garantías, en el que informó que en la Dirección del Registro y Catastro de la Propiedad Federal bajo el folio real número 584/2, se inscribió el Decreto de Incorporación a los bienes del dominio público antes señalado, el veintinueve de marzo de mil novecientos setenta y nueve, (sic).

Con el acta levantada el ocho de noviembre de mil novecientos noventa y tres, se acredita que la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos puso a disposición e hizo la entrega física y material a favor de la Secretaría de Desarrollo Social una superficie de 938-14-00 (novecientas treinta y ocho hectáreas, catorce áreas) del predio denominado "Valle II", ubicadas en el inmueble de propiedad federal denominado El Estribo, ubicado en el Municipio de Ciudad del Maíz, Estado de San Luis Potosí, y en ese mismo acto, se hizo entrega del inmueble al Director General de Procedimientos Agrarios, de la Secretaría de la Reforma Agraria.

Con estas pruebas no se modifica la conclusión alcanzada, toda vez, que de la superficie de 938-14-00 (novecientas treinta y ocho hectáreas, catorce áreas), que se entregó y puso a disposición de la Secretaría de la Reforma Agraria, se les están concediendo 300-00-00 (trescientas hectáreas) que son las que tienen en posesión, de acuerdo con el informe rendido el once de junio del dos mil, por el ingeniero Jorge Alvarez Báez, quien señaló que el resto de la superficie se encuentra en posesión de los poblados "Kilómetro 42", "El Sarnito", "Benito Juárez y su anexo El Potosino", por lo que no existe otra superficie que se pueda disponer para concedérseles en dotación de ejido.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y dos; 43, 189, 192 y tercero transitorio de la Ley Agraria; 1o., 7o., 9o. fracción VIII así como la fracción II del cuarto transitorio, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, y 359, 360 y 361 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Agraria, se

RESUELVE:

PRIMERO. Esta sentencia se dicta para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el amparo número 356/2001-1, por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, el treinta de julio del año dos mil uno.

SEGUNDO. Es procedente el incidente de nulidad de actuaciones hecho valer por Juana Emilia Escobar Martínez y otros, pretendiendo que se declarara la nulidad de la asamblea celebrada el nueve de agosto de dos mil dos, en el poblado denominado "La Mutua", Municipio El Naranjo, antes Ciudad del Maíz, Estado de San Luis Potosí, en la que se llevó a cabo la actualización censal del poblado que nos ocupa, en la que resultaron 142 (ciento cuarenta y dos), campesinos capacitados.

TERCERO. La actora incidentista no acreditó su acción, por ende, no ha lugar a declarar la nulidad de la asamblea, señalada en el resolutivo anterior.

CUARTO. Es procedente la dotación de ejido, promovida por campesinos del poblado denominado "La Mutua", Municipio El Naranjo, antes Ciudad del Maíz, Estado de San Luis Potosí.

QUINTO. Se revoca el mandamiento del Gobernador del Estado de San Luis Potosí, emitido el doce de enero de mil novecientos ochenta y dos, publicado en el Periódico Oficial de la citada entidad federativa.

SEXTO. Es de concederse y se concede al poblado referido en el resolutivo anterior, una superficie total de 300-00-00 (trescientas hectáreas) que se deberán tomar del predio denominado "Valle II" propiedad de la federación, afectable en los términos del artículo 204 de la Ley Federal de la Reforma Agraria. Dicha superficie pasará a ser propiedad del poblado de referencia para constituir los derechos agrarios correspondientes a 142 (ciento cuarenta y dos) campesinos capacitados relacionados en el considerando séptimo de esta sentencia, a favor de quienes el Registro Agrario Nacional deberá expedir los títulos agrarios correspondientes. La superficie concedida deberá ser localizada de acuerdo con el plano proyecto que para el efecto se elabore. En cuanto a la determinación del destino de las tierras la asamblea del poblado beneficiado

resolverá de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria vigente y podrá constituir la parcela escolar, la unidad agrícola industrial para la mujer, la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud y demás áreas reservadas para el asentamiento humano.

SEPTIMO. Publíquese: esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; los puntos resolutiveos de la misma en el Boletín Judicial Agrario; inscribáse en el Registro Público de la Propiedad respectivos; asimismo inscribáse en el Registro Agrario Nacional, para los efectos legales correspondientes.

OCTAVO. Notifíquese a los interesados y comuníquese al Gobernador del Estado de San Luis Potosí, a la Procuraduría Agraria; así como al Juez Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, en relación al cumplimiento que se está dando al juicio de amparo 356/2001-1, ejecútese y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de cinco votos, lo resolvió el Tribunal Superior Agrario; firman los Magistrados que lo integran, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

México, Distrito Federal, a diecisiete de agosto de dos mil cuatro.- El Magistrado Presidente, **Ricardo García Villalobos Gálvez**.- Rúbrica.- Los Magistrados: **Rodolfo Veloz Bañuelos, Marco Vinicio Martínez Guerrero, Luis Angel López Escutia, Carmen Laura López Almaraz**.- Rúbricas.- El Secretario General de Acuerdos, **Humberto Jesús Quintana Miranda**.- Rúbrica.